



¡Sí se puede vencer al gobierno de los banqueros y de los empresarios!



Págs. 4, 5 y 6 • Editorial en páginas centrales

Dos años de pesadilla es más que suficiente: ¡Abajo el PP!

LUCHA SINDICAL ▶ Págs. 14 a 19

**Huelga de jardinería y limpieza viaria en Madrid:
Una lucha ejemplar y una gran victoria**

SDS en huelga indefinida

NAVANTIA

Por la unificación de la lucha

contraportada y pág. 8



ENTREVISTA A ANA GARCÍA, SECRETARIA GENERAL DEL SINDICATO DE ESTUDIANTES

“Si queremos que Wert dimita y que se retire la LOMCE hay que continuar la batalla con una nueva huelga educativa de 72 horas”

María Castro

La muerte de Nelson Mandela ha tenido un profundo impacto entre millones de sudafricanos que identifican su figura con la heroica lucha del proletariado de Sudáfrica contra el infame régimen del apartheid. Por parte de los gobiernos capitalistas y de sus medios de comunicación hacía tiempo que no presenciábamos un derroche tan grande de “condolencias” y de “pesares”, aunque a diferencia de los millones de oprimidos que sinceramente lloran su muerte, la burguesía tiene sus propias razones y están utilizando la figura de Mandela para lanzar una nueva campaña sobre los valores de la “reconciliación nacional”, el “diálogo” y la feliz convivencia entre ricos y pobres.

Sin duda, Nelson Mandela hizo enormes sacrificios y mostró un tremendo coraje y valor en la lucha contra el apartheid, uno de los peores sistemas de opresión y explotación de la historia, que privaba a la mayoría negra y al resto de minorías étnicas de absolutamente todos los derechos políticos, económicos y sociales, obligándoles a vivir marginados y en la más abyecta pobreza, mientras una ínfima minoría blanca acumulaba el grueso de la riqueza y disfrutaba de todos los privilegios, con el beneplácito del imperialismo internacional que tenía en el régimen sudafricano uno de sus más firmes aliados en el continente africano.

Mandela y el ANC

Nelson Mandela perteneció a una generación de activistas en Asia, África y América Latina, que después de la Segunda Guerra Mundial se inspiraron en el proceso de la revolución colonial que sacudiría los cimientos del imperialismo mundial. En 1943 Mandela, junto a otros dirigentes estudiantiles de la época, entraron en el Congreso Nacional Africano (ANC). Al año siguiente Mandela sería uno de los fundadores de sus Juventudes. La entrada de esta nueva generación de luchadores y el impacto de éxitos como la huelga minera de 1946 o la huelga general en Johannesburgo el 1 de mayo de 1950, cambió el carácter del ANC. De ser una organización que se limitaba a hacer súplicas y llamamientos a las distintas instituciones y figuras políticas internacionales, Mandela y sus compañeros consiguieron que en 1949 el ANC adoptara un programa de acción que por primera vez lo convertía en una organización política comprometida en la lucha de masas contra el apartheid. Este giro político y la aproximación en 1950 al Partido Comunista Sudafricano (PCSA) culminaron en 1956 con la aprobación del Estatuto de Libertad, redactado por un militante del PCSA. El estatuto reflejaba el alcance de las luchas de la clase obrera y su influencia en la perspectiva política del ANC.

Lamentablemente, también expresaba la concepción de la revolución por etapas del PCSA, en ese momento uno de los más leales defensores de la burocracia estalinista rusa. Como sucedió en otros países coloniales no concebían la lucha por la liberación nacional y por los derechos democráticos como una tarea vinculada a la revolución socialista; planteaban la necesidad de un largo periodo de desarrollo capitalista “democrático”, bajo la dirección de la burguesía nacional progresista, posponiendo la lucha por el socialismo a un futuro indefinido. El Estatuto de Libertad incorporaba la teoría etapista y aunque defendía, en el papel, la necesidad de nacionalizar la economía y los medios de producción, en ningún caso era un plan “para un Estado socialista”, como reconoce el propio Mandela¹. En la práctica, concebían la idea de un “capitalismo negro” en Sudáfrica, de esta manera, “por primera vez en la historia de este país la burguesía no euro-

La muerte de Nelson Mandela y la lucha de la clase obrera sudafricana



pea tendrá la oportunidad de tener su propio nombre y derechos”².

En 1961 Mandela, junto a otros dirigentes del ANC, fue detenido y acusado de actos de sabotaje, en 1964 fue condenado a cadena perpetua. En total pasó 27 años en prisión en unas condiciones muy duras. La lucha en la que participó e impulsó en los años anteriores a su entrada en prisión y los años pasados en cautividad le convirtieron en un símbolo de la lucha contra el apartheid, dentro y fuera de Sudáfrica.

El fin del apartheid

Aprovechando la muerte de Mandela, muchos insisten en presentar la caída del apartheid como la obra de un solo hombre o la lucha de unos cuantos héroes. Aunque sin duda jugaron un papel destacado, la realidad es que si a mediados de los ochenta el apartheid entró en crisis profunda y comenzó su proceso de descomposición, fue consecuencia de la heroica lucha de masas del proletariado sudafricano que desde los años setenta protagonizó interminables protestas, huelgas y movilizaciones de todo tipo, aún a costa de miles de muertos. Ejemplos de la combatividad y decisión de acabar con el apartheid por parte de la clase obrera sudafricana son las luchas en Natal de 1973, la insurrección juvenil de Soweto en 1976 o los movimientos insurreccionales de los años ochenta, que no sólo pusieron en el orden del día el final del apartheid, sino también las aspiraciones de cambios sociales más profun-

dos, la necesidad de acabar con el capitalismo y la alternativa del socialismo. Los acontecimientos en Sudáfrica se habían convertido en una amenaza para el imperialismo en la región ya que millones de oprimidos africanos tenían puestos los ojos en el proletariado sudafricano, que se había convertido en un punto de referencia.

En 1982, después de la primera huelga política bajo el apartheid, debido a la muerte de un sindicalista detenido y en la que participaron más de 100.000 trabajadores, Mandela fue trasladado de prisión. En 1985 el régimen inició las negociaciones con Mandela que llevarían a su liberación en 1990 y posteriormente a las primeras elecciones democráticas en 1994, en las que el ANC consiguió llegar al poder con el 62% de los votos. De este modo, Mandela se convertiría en el primer presidente negro de Sudáfrica, cargo que ocupó hasta 1999.

El ANC sigue los dictados del FMI

A pesar de que incluso dos semanas antes de salir de prisión, Mandela decía en una carta que “la nacionalización de las minas, bancos e industrias monopolísticas es la política del ANC, un cambio de ideas es algo inconcebible”³, una vez en el poder, Mandela y la dirección del ANC, en lugar de aplicar su programa, siguieron los dictados del FMI y del imperialismo internacional. En la biografía autorizada de Nelson Mandela, escrita por Anthony Samson, explica las negociaciones entre el ANC y los organismos internacionales

previas a la llegada al poder, y cómo se llegó a un acuerdo donde el ANC se comprometía, una vez en el poder, a “reducir el déficit, subir los tipos de interés y abrir la economía, a cambio de acceder a un préstamo del FMI por valor de 850 millones de dólares”⁴. El periodista John Pilger, años después, en una entrevista a Mandela le preguntó sobre esta contradicción entre lo defendido en el programa y lo aplicado en la práctica, le preguntó cómo el ANC había terminado abrazando el thatcherismo y él respondió: “Puede poner la etiqueta que a usted le guste... pero, para este país, la privatización es la política fundamental”⁵.

Sigue el apartheid social, la miseria y la desigualdad

Uno de los puntos del programa del ANC que sí se consiguió fue la creación de una clase capitalista negra. Leyes como la Black Economic Empowerment ha permitido que una minúscula capa de negros se haya enriquecido y ocupe puestos en los principales consejos de administración, entre ellos exdirigentes del ANC y exdirigentes sindicales como Cyril Ramaphosa, antiguo dirigente del sindicato minero NUM y hoy uno de los hombres más ricos del país.

Con el final del apartheid, la población negra sudafricana tiene libertad para votar y los derechos democráticos que les negaba el apartheid, pero no se ha alterado la división fundamental de la sociedad bajo el capitalismo, que se basa en cuestiones de clase y no de raza. Veinte años después, Sudáfrica es una de las sociedades más desiguales del mundo. La brecha entre ricos y pobres es mayor que en 1990, el año en que Mandela salió de prisión, el 60% de la riqueza nacional está en manos del 10% más rico de la población, más del 50% de la población vive bajo el nivel de pobreza y hay más de 20 millones de parados, más del 50% jóvenes.

En los últimos años la cuestión de clase ha salido de nuevo a la superficie y se ha expresado en luchas de masas como la huelga general en 2008 o las protestas masivas durante el mundial de fútbol de 2010 y que han provocado un duro enfrentamiento entre la clase obrera y el gobierno del ANC. Este enfrentamiento tuvo su máxima expresión en agosto de 2012 con la masacre de 35 mineros en huelga en Marikana, y la posterior oleada huelguística en la minería que mostraron imágenes que recordaban los peores episodios sangrientos del apartheid, como fue la represión en Sharpeville o Soweto.

El periódico *The New York Times*⁶ se hacía eco de lo que muchos temen, que la desaparición de Mandela conlleve que el ANC pierda la poca credibilidad que le queda ante los ojos de los trabajadores y eso signifique una intensificación de la lucha de clases, con los riesgos que tendría tanto para el capitalismo sudafricano como para los intereses del imperialismo en el continente.

Los acontecimientos han confirmado una idea que siempre hemos defendido los marxistas: que la única vía para acabar con el apartheid social, económico y político que vive la clase obrera negra y la mayoría de la población sudafricana es la de la revolución socialista.



1. Nelson Mandela, *Freedom in our Lifetime*, 30/6/1956.
2. *Ibid*.
3. *Mail & Guardian*, 15/1/1990.
4. Anthony Samson, *Mandela: The Authorised Biography*, 1999.
5. John Pilger, *Pilger on Mandela. Apartheid never died*, 11/7/2013.
6. *The New York Times*, ‘Mandela’s Death Leaves South Africa Without Its Moral Center’, 6/12/13.

William Sanabria
CMR • Venezuela

La revolución venezolana en un momento decisivo

La lucha contra la especulación implica acabar con el capitalismo

La intervención por parte del gobierno venezolano de varias cadenas de distribución de electrodomésticos y otros productos que especulaban salvajemente con los precios ha hecho que los medios de comunicación burgueses de todo el mundo pongan de nuevo el grito en el cielo. Una vez más hemos escuchado la habitual retahíla de acusaciones: “dictadura”, “autoritarismo”, “intervencionismo”, etc. Lo que no explican estos “defensores del derecho a la información” es que las cadenas intervenidas se dedicaban a cosas como vender una lavadora que debía tener un precio de 5.000 bolívares a 38.000. En varios casos fueron decomisados televisores porque eran vendidos al doble de su precio anterior. En algún caso se llegaban a vender productos a un 1.000% del coste que había tenido su importación. Todo ello con dólares suministrados por el Estado a un precio diez veces inferior al de mercado.

Las medidas del gobierno y su efecto sobre las masas

La decisión de obligar a algunas grandes tiendas a vender a un precio fijado por el gobierno para cortar la especulación ha generado algunas expectativas en sectores de las masas, aunque entre otras capas hará falta mucho más para recuperar el apoyo a la revolución. Como explicaba un volante editado por la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE) de Anzoátegui, dirigida por los marxistas de la Corriente Marxista Revolucionaria, “saludamos la decisión del presidente Nicolás Maduro de intervenir varias cadenas de electrodomésticos y llamamos a extender esta intervención a otros sectores y llevarla hasta el final expropiando y nacionalizando bajo control de los propios trabajadores y el pueblo todas las empresas que especulan y sabotean la revolución. (...) el gobierno bolivariano debe aprovechar las expectativas que ha despertado la intervención de Daka, Imeca y otros comercios para llamar (como ya lo hiciera el presidente Chávez) a los trabajadores a tomar todas las empresas que se dedican a especular (...) Si nos quedamos a medias, si hoy se interviene contra los capitalistas pero se les deja que sigan teniendo el control de la producción y la distribución, utilizarán su poder para hacer desaparecer los productos, culpar al gobierno y al socialismo de la escasez”.

Esto ya ha empezado a ocurrir. Los capitalistas ocultan productos, muestran sus comercios vacíos pasados unos días de la intervención estatal para responsabilizar al gobierno o provocan enormes colas para acceder a los productos distribuidos a precio regulado. El problema es el mismo que hemos sufrido durante estos años de revolución. El gobierno bolivariano ha tomado medidas como el control de cambios, el control de precios o la intervención e incluso expropiación de algunas empresas. Inicialmente estas medidas supusieron el mantenimiento de los puestos de trabajo en empresas abandonadas o cerradas por los empresarios, el mantenimiento de los precios de algunos productos básicos durante un tiempo o ciertos obstáculos a la fuga de divisas. Pero, como explicamos los marxistas, el capitalismo no se puede controlar ni regular. Al seguir los principales bancos y empresas en manos privadas cada medida parcial acaba convirtiéndose en un boomerang contra la revolución. Los empresarios boicotean la producción (según sus propios datos sólo utilizan un 50% de la capacidad productiva instalada), esconden productos y especulan con ellos. En estos momentos el negocio más rentable para los empresarios es especular en el mercado paralelo con los dólares o euros que les suministra el propio Estado para importar. Los empre-



Trabajadores de Lácteos Los Andes, en lucha por el control obrero en su fábrica

sarios compran al Estado dólares por 6,30 bolívares para luego venderlos a 60 e incluso 70 bolívares en el mercado paralelo. Un negocio redondo.

La imposibilidad de controlar el capitalismo y las perspectivas electorales

La política del gobierno bolivariano hasta ahora ha sido denunciar la guerra económica organizada por los empresarios, llamar a los supuestos sectores “progresistas” o “patriotas” (un sector de la burguesía que nunca nadie ha visto en ninguna parte por la sencilla razón de que no existe) a portarse bien e invertir en el país, y desarrollar una política de intervención del Estado en la economía que intenta cuadrar el círculo: mantener los gastos sociales y el empleo en las empresas públicas sin acabar con la propiedad capitalista de los medios de producción y la estructura burguesa del Estado.

El resultado ha sido incrementar el endeudamiento con potencias imperialistas como China o Rusia (que son presentadas como aliados antiimperialistas) e incrementar espectacularmente la inflación, un factor que golpea duramente la moral de las masas. Productos básicos como una docena de huevos que a principios de año costaba 18 bolívares se venden a 50; un kilo de tomates ha pasado de 18 o 20 a 45; las cebollas de 20 a 80, en pocos meses. Lo mismo ocurre con los distintos tipos de carne y queso, la harina pan (imprescindible para la popular arepa), aceite, etc. Los productos cuyo precio está regulado han desaparecido de los anaqueles. Los empresarios recurren a maniobras como vender productos similares bajo otro formato al doble o triple de precio. Otro problema que ya existía pero se ha agravado enormemente es el desabastecimiento de productos de primera necesidad como leche, azúcar y otros.

Esta situación resulta insostenible para las masas. Tras un año denunciando desde el gobierno que “hay una guerra económica por parte de los capitalistas para minar la moral del pueblo y sabotear la revolución” (lo cual es cierto), el que no se tome ninguna medida decisiva que acabe con ello genera un malestar y escepticismo creciente entre las masas. En las últimas elecciones presidenciales este escepticismo ya se reflejó. Sectores importantes que en anteriores elecciones votaron por Chávez se abstuvieron y alrededor de 700.000 votantes

apoyaron a la oposición contrarrevolucionaria. Es bastante probable que esta tendencia se vuelva a manifestar en las elecciones municipales del 8 de diciembre.

No hay terceras vías

Si queremos recuperar el apoyo electoral y salvar la revolución no basta con medidas parciales. Hay que nacionalizar la banca y las principales empresas bajo control obrero y social y dismantelar el actual Estado, que mantiene su estructura burguesa y se ve dominado por el burocratismo y la corrupción, sustituyéndolo por la administración obrera de la industria nacionalizada a través de consejos de trabajadores y vecinos formados por delegados elegibles y revocables en todo momento.

Otra medida clave debe ser el monopolio estatal del comercio exterior. En estos momentos el gobierno venezolano ya tiene el monopolio de las divisas pero, como hemos señalado más arriba, se las concede a los empresarios al precio oficial o mediante subastas a precios preferenciales, para que realicen importaciones. El resultado es una sangría de dólares hacia el mercado paralelo y la especulación pura y dura.

El gobierno ha anunciado la creación de dos corporaciones para incrementar el control, pero lo único que puede resolver este problema es que sea el propio Estado quien realice directamente todas las exportaciones e importaciones y distribuya los productos a precios asequibles, al mismo tiempo que estatiza las grandes empresas y bancos bajo control obrero para desarrollar un plan de industrialización y producción que reduzca las importaciones. Todo ello sólo puede hacerse bajo un Estado dirigido por los trabajadores y el pueblo. Si se hace manteniendo el capitalismo o bajo un Estado dirigido por burócratas a los que nadie controla el resultado será más problemas y corrupción.

Existe una gran inquietud entre los sectores más radicalizados del pueblo y de los trabajadores que perciben que la revolución está en peligro. La clave para salvarla es que la clase obrera se ponga al frente de la misma con un programa que rompa con el capitalismo definitivamente. La UNETE y la CSBT (las dos centrales sindicales chavistas) deben romper con la división que actualmente existe en las luchas y desarrollar un frente único de acción en torno a un programa que plantee las ideas antes expuestas. La unidad en la lucha del movi-

miento obrero es posible, como ha mostrado en Anzoátegui el llamado de los marxistas de la UNETE a la CSBT a luchar juntos contra la especulación. Se han organizado unitariamente ruedas de prensa y un acto del candidato del PSUV a la alcaldía de Barcelona con los trabajadores para presentarle sus propuestas de cómo completar la revolución. Hay que proponer públicamente este mismo plan al presidente Maduro, al gobierno, a la dirección del PSUV y al conjunto de las bases revolucionarias. Al mismo tiempo hay que llamar a no ceder a la presión de los sectores que desde las filas del mismo PSUV llaman al pacto con la derecha y a la negociación.

Llevar hasta el final la revolución

El llamado de dirigentes como el exvicepresidente José Vicente Rangel a indultar a reconocidos golpistas de 2002 por motivos humanitarios ha sido contestado justamente por muchos revolucionarios. Incluso, el llamado del propio presidente Maduro a un diálogo nacional, lejos de clarificar cuáles son las tareas tras las elecciones, contribuye a crear desorientación y preocupación. ¿Acaso vamos a aceptar ahora argumentos como que el problema de Venezuela es que falta diálogo entre gobierno y oposición? ¿Cada vez que la dirigencia bolivariana ha intentado dialogar ellos aprovecharon para ganar tiempo, sabotear y organizar golpes de Estado y planes de intervención imperialista contra la revolución?

El único modo de impedir el avance contrarrevolucionario y salvar la revolución es solucionando los problemas concretos que tienen las masas: subidas de precios, desabastecimiento, inseguridad, informalidad, desigualdad, corrupción... Ello sólo se puede hacer expropiando a los capitalistas y construyendo un Estado revolucionario dirigido por los trabajadores y el pueblo. Si lo hacemos, los millones de jóvenes, trabajadores atrasados y sectores de las capas medias que, desesperados y manipulados, han empezado a escuchar la demagogia de la oposición serán recuperados. Cualquier diálogo con los dirigentes burgueses, golpistas y contrarrevolucionarios de la oposición sólo será una nueva trampa y un enorme peligro para la revolución.

Vergonzosa sentencia en el caso 'Prestige'

La avería y posterior hundimiento del buque petrolero *Prestige* en noviembre de 2002, cargado con 77.000 toneladas de petróleo, no sólo significó una de las mayores catástrofes medioambientales de la historia de la navegación, sino que puso de manifiesto la incapacidad de los dirigentes del Partido Popular así como del propio estado burgués para hacer frente a una tragedia de estas características. En contraste con la absoluta incompetencia y dejadez de los responsables del gobierno central y de la Xunta,

se produjo una gigantesca oleada de participación de la población en las tareas de prevención y limpieza del chapapote que llegaba a las costas. Decenas de miles de personas, sobre todo jóvenes, de Galicia y del resto del Estado, se movilizaron poniendo en riesgo su salud. La población de las localidades más afectadas se volcó en la organización de todas las tareas y en algunos casos se formaron comités a los que se supeditó la propia administración pública. El accidente del *Prestige* provocó también una

verdadera explosión de protesta contra la derecha, con manifestaciones multitudinarias en Galicia, constituyéndose el movimiento Nunca Más, y en todo el estado. Aquellas movilizaciones, junto con las protestas previas contra la LOU y las posteriores contra la guerra de Iraq y las mentiras del gobierno respecto a los brutales atentados del 11-M, constituyeron un eslabón importante de las movilizaciones que llevaron a la caída del gobierno de Aznar en 2004.

Santiago Freire

El *Prestige*, una chatarra flotante del que sólo apelando a la avaricia capitalista se puede entender que estuviera operativo, sufre una rotura en su casco el 13 de noviembre del 2002 debido a la fatiga de los materiales del mismo producida por su estado defectuoso y las embestidas del mar. Desde el primer momento hubo una absoluta impotencia y una total improvisación de las autoridades para dar una respuesta a esta situación. Baste decir que el propio remolcador *Ría de Vigo*, subcontratado a la empresa Remolcanosa para realizar tareas de salvamento, tardó varias horas en iniciar las labores de rescate hasta que su armador y los del *Prestige* alcanzaron un acuerdo económico sobre la cuantía del mismo. En los días siguientes, falto por completo de algún plan para actuar, sin hacer caso a informes técnicos que pedían llevar el barco a un puerto refugio y señalando el peligro de que el casco se partiera en breve, el gobierno ordena alejarlo al máximo de la costa, viéndose obligado a realizar varios cambios de rumbo (el primero que se estableció lo llevaba directamente a una borrasca) en tanto que el buque seguía partiéndose y soltando fuel.

Ineptitud y cinismo de la derecha

Durante esos días desde el propio gobierno se plantearon soluciones a cada cual más esperpéntica: desde bombardear el barco, idea del ministro de Defensa Federico Trillo y que fue rechazada por disparatada, hasta llevarlo a aguas portuguesas, lo que



forzó a que la marina lusa movilizara una fragata para evitar esa eventualidad. Finalmente, tras recorrer 473 kilómetros, el 19 de noviembre el *Prestige* acabó por partirse en dos, liberando de golpe 12.000 toneladas de fuel.

Pero además de lo señalado, los dirigentes del PP también dieron muestras de su cinismo y absoluto desprecio hacia todos los afectados, al igual que hicieron posteriormente en otras tragedias como la del metro de Valencia o el Madrid Arena, y lo mismo que hacen hoy en día con la actual crisis económica. Su objetivo desde un principio fue minimizar los efectos del derrame de petróleo. Así, el delegado del Gobierno, Fernández de Mesa, aún sostenía el 19 de noviembre que "a ojo de buen cubero, el *Prestige* ha vertido 3.000 o 4.000 toneladas", cuando ya se habían vertido

54.000 toneladas; López Veiga, consejero de Pesca de la Xunta del PP, llegó a decir con total desvergüenza que "no se trata de una marea negra, sólo de un vertido de fuel"; y el mismo Rajoy, por entonces vicepresidente del gobierno, dejó aquella frase para la posteridad en la que calificaba las 120 toneladas de petróleo que expulsaba diariamente el buque tras hundirse de "hilos de plastilina en estiramiento vertical". El ministro Arias Cañete declaraba cuatro días antes del hundimiento del barco lo siguiente: "La rápida actuación de las autoridades españolas ha evitado una verdadera catástrofe pesquera y ecológica".

Un juicio farsa

El reciente juicio sobre el caso *Prestige* lejos de cerrar esta herida la ha abierto si ca-

be todavía más, con una sentencia que sólo se puede calificar de vergonzosa y que exige de culpabilidad a todos los implicados en aquellos hechos. Un juicio donde, para empezar, no se sentó en el banquillo ni a los armadores del barco ni a los miembros del gobierno, que con su comportamiento negligente contribuyeron a agravar de forma extrema las consecuencias de aquel accidente. Un juicio donde sólo el capitán del *Prestige*, que cuanto menos tuvo el coraje de permanecer en el mismo hasta el último momento, ha sido condenado por desobediencia al supuestamente negarse a ser remolcado, a pesar de que las grabaciones de las conversaciones de este con el Centro Zonal de Coordinación de Salvamento de Finisterre indican que fue el propio remolcador el que se negó a efectuar la operación de rescate, a la espera de que se llegara a un acuerdo sobre el precio que iba a cobrar su armador. Un juicio que también exonera a las aseguradoras de abonar un solo euro de los casi 4.000 millones de coste público que tuvo el accidente, por no hablar del incremento del desempleo, del 12% en las zonas más afectadas por la marea negra en los años siguientes a la catástrofe, o de las pérdidas productivas en la pesca y el marisqueo que, a dos años de la catástrofe, ascendían a 88 millones de euros. Esta farsa de juicio lanza un mensaje muy claro: lo fácil y barato que puede resultar para los capitalistas contaminar y destruir el medio ambiente. En definitiva, se ha vuelto a mostrar la auténtica cara de la justicia burguesa y que su verdadera misión no es más que defender los intereses de los ricos y poderosos.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, engaña a las víctimas del accidente ferroviario de Santiago

Redacción

El 13 de noviembre de 2013 tuvo lugar una reunión de la Plataforma Víctimas Alvia 04155 con la ministra de Fomento, con el fin de trasladarle sus reivindicaciones. En el comunicado de valoración de dicha reunión, la Plataforma denunció sentirse engañada por Ana Pastor. La ministra se negó a la formación de una comisión de investigación parlamentaria para aclarar toda la verdad sobre aquel trágico accidente en el que murieron 81 personas y quedaron heridas 130. Argumentó que "ya existían dos comisiones", cuando resulta que una de ellas es para investigar "accidentes ferroviarios" en general, está nombrada por el propio ministerio y su sede es la del mismo ministerio; la otra es en realidad una subcomisión y su objetivo es "analizar el sistema ferroviario español". La Plataforma también denunció que la ministra dijera en la reunión que Renfe y Adif estaban colaborando con total transparencia y diligencia con la justicia cuando el propio juez Luis Aláez "se queja en su auto de los informes técnicos remitidos por Renfe y Adif". La mi-



Miembros de la Plataforma antes de reunirse con la ministra de Fomento

nistra tampoco contestó a las preguntas de la Plataforma sobre una nota de prensa del Ministerio de Fomento de la anterior legislatura en el que se afirmaba que los sistemas de conducción automática estaban instalados en la línea accidentada, cosa que se ha demostrado que era falsa o sobre los 164 millones de euros gastados en el sistema ERTMS que nunca funcionó por su incompatibilidad con trenes y vías.

La Plataforma Víctimas Alvia 04155 exige, entre otras cosas, el derecho a conocer todos los datos en torno al accidente, la asunción de responsabilidades de todos los cargos, políticos o técnicos, en ba-

se al puesto que ocupan o hayan ocupado relativo a la seguridad de los viajeros en la línea en que se produjo el accidente. Su principal reivindicación es crear una Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Galicia para poder conocer la verdad y depurar todas las responsabilidades políticas. Esta exigencia tiene su base en una serie de declaraciones contradictorias realizadas por distintos responsables y que se han demostrado falsas:

• El exministro de Fomento, José Blanco, acompañado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo,

inaugura la Línea de Alta Velocidad A Coruña-Santiago de Compostela-Ourense el 10 de diciembre de 2011, destacando en su nota de prensa "el incremento de la seguridad mediante el uso de tecnologías punta en los sistemas de conducción automática de trenes". Y, tras el accidente Renfe y Adif, responsabilizan sólo al maquinista, mientras a los viajeros nos ocultaron que nuestra seguridad, en un tren que podía alcanzar los 250 km/hora, sólo dependía de la pericia de una persona.

• Después del accidente, el 26 de julio, el presidente de Renfe, Julio González Pomar, declara que "no es un accidente de la alta velocidad española".

• En la grabación del tren siniestrado el maquinista repite en varias ocasiones "Ya lo dije a seguridad, que esa curva era peligrosa."

• E-mail: victimasalvia01455@gmail.com

• Facebook: **Plataforma Víctimas ALVIA 04155**

• Teléfonos de contacto: **676 395 731**
671 576 423 / 600 075 277

Daniel Reyes
CCOO

“El derecho a huelga se consigue haciendo huelgas; el derecho de reunión, reuniéndose; el derecho de asociación, asociándose; y todos estos atributos de la libertad, es únicamente la acción de las masas la que puede acabar imponiéndolas”

Marcelino Camacho



No a la ley mordaza ¡No pasarán!

El gobierno del partido de la patronal, los banqueros, los caciques, los corruptos y demás parásitos, está intentando imponer su programa de involución social, tratando de devolvernos a las condiciones de vida de su añorada década de los 50. Con la LOMCE pretenden volver a las aulas franquistas. La reforma laboral ha reforzado todavía más la dictadura patronal en las empresas. Y ahora también quieren echarnos de las calles. Ya se ven alzando las pezuñas cara al sol como en los buenos tiempos.

Reforma del Código Penal y nueva Ley de Seguridad Ciudadana

La burguesía es consciente de que para arrebatar los derechos sociales y las libertades democráticas que conquistó el movimiento obrero en lucha contra la dictadura, primero tiene que derrotarnos. Para lograrlo han apostado por aumentar la represión, que intentan justificar a través de la criminalización de la protesta, utilizando para ello a la Brunete mediática (la campaña de difamación permanente contra los sindicatos forma parte de esta estrategia).

El aumento de la represión en los últimos años es una realidad palpable. Casos de brutalidad policial, la cascada de multas para ahogar económicamente a los movimientos sociales, la detención de sindicalistas o la criminal persecución que está sufriendo el SAT dejan constancia de ello. Pero como todavía quedan ciertas garantías democráticas (por ejemplo, muchas de las multas impuestas al 15-M han sido tumbadas en los juzgados), los demócratas de toda la vida se han puesto manos a la obra para eliminarlas. Fruto de este trabajo de cloaca surgen las propuestas de reforma del Código Penal y de nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

La trampa consiste en eliminar las faltas del Código Penal, convirtiendo algunas en delito y pasando a perseguirse vía administrativa las demás. Y de paso, se inventan nuevos delitos e infracciones. Por ejemplo, el nuevo

Código Penal considerará delito la resistencia pasiva, la ocupación pacífica de locales públicos o privados y difundir convocatorias a través de las redes sociales. Además, será un agravante cometer delitos contra el orden público en una manifestación o reunión numerosa (ver EL MILITANTE nº 276).

Aún más descartado es el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, hecho a la medida de los movimientos sociales (como los trajes a Camps). En primer lugar, al perseguirse vía administrativa las infracciones, desaparecen las garantías procesales que conlleva todo procedimiento judicial. De esta forma, la Administración pasa a ser juez y parte, quedando el ciudadano en una situación de completa indefensión (recurrir una multa vía contencioso administrativo puede tener un coste en tasas judiciales de hasta 2.750 euros). En segundo lugar, se proponen sanciones tan desproporcionadas que arruinarían de por vida al represaliado. Y por último, sólo hace falta ver algunas de las conductas consideradas infracciones para entender las verdaderas intenciones del Ministerio del Interior:

• **Serán infracciones muy graves (multadas con entre 30.001 y 600.000 euros):** convocatoria y asistencia a manifestaciones con inobservancia de la legislación electoral (no se han olvidado del “antes de votar, queremos la verdad” de 2004); perturbación muy grave del orden en actos públicos (como la reciente protesta contra Rubalcaba en la universidad de Granada); reuniones o manifestaciones no comunicadas en infraestructuras críticas (como la ocupación de las pistas del Prat por los trabajadores de AENA o de las vías del AVE por jornaleros del SAT); celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas desoyendo la orden de suspensión de la autoridad (como el concierto en apoyo a los detenidos en la última

huelga general en el CSO La Traba, que la policía impidió por la fuerza).

• **Serán infracciones graves (multadas con entre 1.001 y 30.000 euros):** concentraciones ante instituciones del Estado (como la convocatoria Rodea el Congreso); perturbación grave del orden en actos públicos; obstruir a la autoridad en la ejecución de decisiones administrativas o judiciales (como en los desahucios); desobediencia a la autoridad o negativa a identificarse; manifestaciones o reuniones sin autorización o negativa a disolver las autorizadas; ofensas o ultrajes a España, las comunidades autónomas y entidades locales; la falta de colaboración con la policía en la averiguación o prevención del delito (¡quieren convertirnos en chivatos por ley!); escalar edificios públicos para protestar (como las típicas acciones de Greenpeace).

• **Serán infracciones leves (multadas con entre 100 y 1.000 euros):** manifestaciones que incumplan la ley de reunión; amenazar o insultar a la policía, así como su grabación y distribución (no sea que sus vecinos les vean agrediendo al personal); amenazas, coacciones o injurias en la vía pública (esta va para los escraches); injurias, calumnias y faltas de respeto por cualquier medio a las instituciones, autoridades, agentes y empleados públicos (¿esto incluirá llamar vagos a los trabajadores públicos cuando quieren recortarles sus derechos?); entorpecer la circulación peatonal (ya no hará falta cortar la calzada en una protesta para ser multado); la ocupación de espacios públicos o privados (como sedes de bancos).

‘Seguratas’ equiparados con policías y listas negras

Tampoco han desaprovechado para aumentar la recaudación y ahondar en la respuesta

punitiva a problemas sociales (hasta 30.000 euros de multa para el botellón, la conducción de *cundas* o la tenencia ilícita y el cultivo de estupefacientes aunque no sea para traficar). Además, incluyen sanciones cuyo fin es privatizar el espacio público, como considerar infracción leve practicar juegos o deportes en lugares no habilitados para ello (para jugar al fútbol sin ser multado tendremos que pagar por usar las instalaciones de los polideportivos privatizados). Y otras absurdamente recaudatorias (será infracción leve perder más de dos veces el DNI en un plazo de cinco años). Y por si alguien todavía dudaba, se creará un fichero de infractores reincidentes. Es decir, van a legalizar las listas negras de rojos y masones que ya existen.

A estas dos reformas, hay que sumarles las ordenanzas municipales de muchos ayuntamientos que ya sancionan duramente el reparto de panfletos, la pegada de carteles, hacer pintadas, coger comida de la basura, etc. Y no olvidemos que ya rebuznan contra el derecho a huelga. Y para rematar la jugada, con la futura Ley de Seguridad Privada quieren equiparar a las fuerzas policiales con las empresas de seguridad privada, estableciendo su “complementariedad en pie de igualdad”. Los *seguratas* podrán identificar, cachear y detener en la vía pública, participar en el mantenimiento del orden público y patrullar en calles comerciales. Además, las empresas de seguridad podrán acceder a los ficheros y las investigaciones policiales. Esto es muy peligroso. No olvidemos que los fascistas campan a sus anchas por este sector, como los energúmenos de España 2000 que trabajan para su líder José Luis Roberto en Levantina de Seguridad. La externalización de funciones policiales, además de un chollo para los de siempre, puede terminar dejando la seguridad ciudadana en manos de lúmpenes y fascistas con contrato a fin de obra.

Todo indica que están preparando el aparato del Estado para la represión a gran escala. Pero esto no refleja fortaleza de la derecha, sino miedo y debilidad. De hecho, la contestación social es cada vez más fuerte y está dando sus frutos. La privatización de la sanidad madrileña está paralizada, la LOMCE no se ha podido aplicar este curso y se ha reactivado el tejido social de los barrios (15-M, PAH, comités de parados, Red de Solidaridad Popular, etc.). Por otro lado, los conflictos laborales se están radicalizando. Esta es la única manera de frenar la represión: organización, solidaridad y lucha. Ya tumbamos vuestra dictadura y podríamos volver a hacerlo. Pero no hará falta. Esta vez no pasaréis.

Cuchillas en la valla de Melilla

La doble moral del PP en su defensa del ‘derecho a la vida’

Ana Sanjuán

El gobierno del PP ha demostrado una vez más su carácter reaccionario y su desprecio absoluto por la vida de los miles de inmigrantes africanos que cada año intentan cruzar las fronteras de Ceuta y Melilla en busca de un futuro mejor. Además del endurecimiento de las leyes antiinmigración o de privarles del derecho a asistencia sanitaria pública, ahora el gobierno ha dado un paso más. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, responsable también del infame proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, anunció la instalación en la frontera de Melilla de alambre con cuchillas, conocidas como concertinas.

Nada extraño si tenemos en cuenta los antecedentes personales y políticos de un ul-

trarreaccionario como Jorge Fernández Díaz. Hijo de un militar franquista que en los años sesenta fue el jefe de la Guardia Urbana de Barcelona, es conocido por su ferviente militancia católica. Ayudó a crear la asociación Familia y Dignidad Humana, que forma parte del lobby antiaborto, incluso hace unos meses llegó a comparar el aborto con ETA. Es también uno de los firmantes del recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de matrimonio homosexual porque “no garantizaba la pervivencia de la especie”. Por no hablar del uso que ha hecho de la represión policial desde que llegó al cargo. Basta con recordar la brutal intervención policial en la manifestación del 25-S y su posterior felicitación a la “policía que actuó extraordinariamente bien”. Su defensa del franquismo quedó en evidencia cuando apeló a la “libertad de

expresión” durante la polémica por la publicación del *Diccionario Biográfico Español* que ensalzaba la figura de Franco. La misma “libertad de expresión” que ahora pretende asfixiar en nombre del “estado de derecho”.

‘Erosiones superficiales’

El anuncio de la instalación de las concertinas ha recibido un aluvión de críticas, no sólo procedentes de asociaciones de derechos humanos o de inmigrantes, sino incluso de los sindicatos policiales que expresaron sus dudas sobre la efectividad de esta decisión ya que no evitaría que los inmigrantes continuaran saltando la valla. Ante las críticas, el ministro dijo que “sólo producen erosiones leves y superficiales” y que es “difícil de entender” que “particula-

res e instituciones empleen este sistema para proteger propiedades privadas” y que el Estado “no pueda utilizarlo para proteger sus fronteras”. Más escandalosa, si cabe, ha sido la actuación del presidente del Gobierno, pidiendo un informe a Interior porque: “no sé si pueden producir efectos sobre las personas”, para a continuación señalar con todo el cinismo del mundo que “todos los accidentes que ha habido hasta ahora han sido por saltar la valla”.

Parecen olvidar que en 2009 un inmigrante murió en la valla de Ceuta desangrado tras seccionarse una arteria con las cuchillas. De hecho, en 2006 se retiraron de la valla de Melilla por las graves heridas que provocaban a miles de inmigrantes cuando intentaban cruzar la frontera.

El PSOE rápidamente ha mostrado su oposición a esta medida, pero en este caso no puede dar ninguna lección de moralidad, su posición resulta hipócrita si tenemos en cuenta que fue el gobierno de Zapatero el que aprobó el 14 de octubre de 2005 “por vía de urgencia” la instalación de bayonetas y concertinas en las dos fronteras.

José Luis Ruiz
 Militante del PSOE (Socialistas
 por la Izquierda - IS Madrid)

Tras la Conferencia Política, el PSOE sigue exactamente donde estaba

Después de la Conferencia Política, el PSOE sigue exactamente donde estaba. Plantear seriamente que en esa conferencia el Partido Socialista ha enmendado errores y reflexionado sobre la situación social y económica actual por la que atraviesa el capitalismo no sólo sería engañarnos a nosotros mismos, sino que pretenderíamos engañar a los trabajadores. Todos sus documentos rezuman palabrería hueca, brindis al sol y, en el mejor de los casos, esbozos de promesas condicionadas al consenso de “todos”.

Cualquier problema serio de los que estaban planteados fue dejado de lado, incluyendo el de la cuestión nacional en Catalunya. Síntoma de lo poco que han cambiado las cosas para la dirección del PSOE es el hecho de que hayan acordado, ante la protesta de gran parte de los delegados, el apoyo a la monarquía; incluso se han “preocupado” de que una mujer pueda reinar, para lo cual proponen cambiar la Constitución (página 8, apartado 3, del documento *Reformas Constitucionales*). Y esto sucede en un ambiente de descrédito de la institución monárquica, salpicada con gravísimos casos de corrupción y despotismo tan habituales entre los Borbones.

El proceso de esta Conferencia fue puesto en marcha con la desgana con la que se hacen las cosas para cumplir. La participación de las bases no ha sido especialmente destacable y nadie sabe de donde han salido esas 250 entidades sociales que han participado ni quién ha elegido los 750 delegados. No es de extrañar, por tanto, que no se hayan aprobado ni convocado las primarias.

Rubalcaba afirmaba que “el PSOE ha vuelto”, e incluso otros se atrevían a decir que había girado a la izquierda. Eso no ha ocurrido ni en la terminología ni en los hechos, todo lo más, discursos lamentables como el de Susana Díaz babeando palabrería



patriótica. Pero de medidas concretas para las familias obreras, ni mención.

La dirección del PSOE deposita todas sus esperanzas en los ya manidos pactos y consensos. Pretenden recuperar los derechos perdidos y consolidar nuevos sobre la base de reformar la Constitución.

Este es un grave problema. Los socialdemócratas nos dicen que hay que incorporar a la Constitución los derechos sociales básicos para que no puedan ser atacados. Sin embargo, todos esos derechos, de manera genérica, ya están recogidos en la misma. ¿Acaso Rubalcaba y compañía se creen que la burguesía española va a respetar los derechos de nadie por el simple hecho de que vengan recogidos en un papel? Y de llevarse adelante, ¿cómo se garantizarían los recursos económicos destinados a ello?

De dónde sacarían el dinero es algo que no aclaran, mientras en la página 3 del apar-

tado ‘Crecimiento y Empleo’ afirman que uno de los tres retos mas importantes de la economía española es el de “cerrar nuestra brecha fiscal para garantizar el estado de bienestar y la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas”(¡!).

Un programa que no cuestiona el capitalismo

El documento de 130 medidas fija las intenciones y voluntades de la dirección socialista en relación a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios cuando prometen “recuperar el poder adquisitivo de los salarios en cuanto se asiente el crecimiento de la economía española” (medida 30, página 11). Esto es, no se sabe para cuando.

Otra cosa que deja para mejor ocasión es el aumento del gasto en Educación hasta el 7% del PIB en un plazo de ocho años; Y lo peor está por llegar. En el apartado “de-

recho a la educación” del documento “Reformas Constitucionales” no hace mención a la derogación de la Ley Wert (posiblemente lo dejen en manos del “consenso” prometido por “todos” para su derogación, incluida la derecha nacionalista), y en referencia a los centros concertados les concede un claro espaldarazo dado que les da el nivel de escuela “subsidiaria de la pública” (medida 62, página 18). En referencia a las pensiones, sólo plantea volver a la reforma de 2011. ¡Como si ello significara una mejoría sustancial para el sistema!

No es nuestra intención destripar las resoluciones de la Conferencia, porque no aportan nada nuevo. Lo que sí es destacable es que Rubalcaba y el resto de los dirigentes socialdemócratas se han lanzado, como hasta ahora, a detallar toda una serie de medidas que lo único que pretenden es ser la bala en la recámara de la estabilidad del sistema burgués y del capitalismo en general.

Para luchar consecuentemente por recuperar los derechos robados, el PSOE debería cambiar diametralmente su acción política, dado que la actual, por su inacción en unas ocasiones y por su colaboración en otras, le han convertido en uno de los pilares del desacreditado y aislado gobierno de la derecha.

No hay una sola palabra ni una sola medida que nos haga pensar que un hombre como Rubalcaba, que participó en el Gobierno de los recortes con Zapatero vaya a cambiar tanto como para luchar por devolver los derechos robados por el gobierno del PP. Ello debería haber ocasionado un cambio radical desde ya, en la forma de gobernar del PSOE allá donde mantiene gobiernos autonómicos y locales, donde sus cargos públicos se afanan en la aplicación de las directrices del gobierno Rajoy como alumnos aventajados.

Antonio García Sinde
 Izquierda Unida

Una buena señal del enorme éxito de la huelga de los trabajadores de Limpieza Viaria y Jardinería de Madrid ha sido que el propio Presidente del Gobierno haya vuelto a poner sobre la mesa la propuesta de aprobar una ley que restrinja el ejercicio del derecho de huelga con la excusa de asegurar el cumplimiento de los servicios mínimos que se imponen en todas las huelgas en las que la Administración considera afectado algún supuesto “derecho ciudadano”.

Para la patronal lo peor de esta victoria de los trabajadores no ha sido la frustración de su plan de grandes negocios en Madrid. Lo peor ha sido que son plenamente conscientes de que el resultado de la huelga es un ejemplo y un estímulo para que en otras empresas y en otros sectores se emprenda con decisión el camino de la lucha contra los recortes salariales y de derechos sociales que los empresarios nos intentan imponer.

Ante el temor de que los acuerdos con las direcciones sindicales mayoritarias empiecen a ser insuficientes para frenar la protesta obrera, el Gobierno ha decidido reforzar su arsenal de medidas represivas para convertir en papel mojado el derecho a huelga conquistado a un precio altísimo en las luchas de la Transición.

No contentos con el arsenal de medidas antihuelga que ya aplican intensamente —servicios mínimos tan abusivos que

¡No a la ley de huelga que prepara el gobierno del PP!

en ocasiones son incluso mayores que el servicio prestado en un día laborable normal, recurso a la contratación de otras empresas para romper la huelga, como acaban de intentar en Madrid con la contratación de Tragsa para barrer las calles, utilización ilimitada de la violencia de las fuerzas represivas del Estado como auténtico contrapiqueo patronal— la propuesta del PP quiere dar un paso decisivo para ahogar definitivamente la capacidad de los trabajadores de realizar una huelga legal con unas mínimas probabilidades de éxito.

Pero la propuesta de una restricción legal del derecho de huelga no es una novedad. En 1993 el gobierno de Felipe González intentó formular una ley similar, después de haber comprobado con la huelga general del 14 de diciembre de 1988 la enorme fuerza de la clase obrera movilizada. Y en el verano de 2010, después de la extraordinaria huelga del Metro de Madrid, de nuevo el PSOE volvió a poner sobre la mesa una propuesta de este tipo. Pero en ambas ocasiones el temor a la respuesta que los trabajadores pudiéramos dar ante este claro intento de sujetarnos aún más al poder del patrono hizo que el gobierno se viera obligado a aparcar sus planes.

Y en esta ocasión podemos estar seguros de que este nuevo intento volverá a ser derrotado mediante la movilización y la lucha. Precisamente en los días siguientes al final de la huelga de la Limpieza y Jardinería madrileña se han multiplicado las convocatorias de huelga, con la relevante característica de que muchas de ellas son huelgas indefinidas.

Nuevas huelgas indefinidas en Barberà del Vallès, Navarra, Gipuzkoa y Madrid

Así, los trabajadores del servicio municipal de limpieza de Barberà del Vallès (Barcelona), los del sector de Artes Gráficas de Navarra, los de la fábrica de Marie Brizard de Zizúrkil (Gipuzkoa) están convocados ya a la huelga indefinida ante los graves ataques que les plantean sus patronales; los trabajadores de Aserpinto, la empresa de servicios municipales de Pinto (Madrid), acaban de aprobar en votación secreta la convocatoria de una huelga indefinida para defender unas condiciones de trabajo dignas; y los trabajadores de Alimentación El Pozo, también se han pronunciado por la huelga ante las agresiones patronales. Todas estas convocatorias son representati-

vas del ambiente que reina hoy en un número cada vez mayor de empresas: plena disposición a una lucha decidida y firme, sin aceptar recortes o despidos pactados, siguiendo el ejemplo de los barrenderos y jardineros de Madrid.

Este ambiente de lucha garantiza que cualquier intento del PP de limitar legalmente el derecho a huelga será desbordado por la movilización y la lucha obrera. Al igual que hace unas décadas la clase trabajadora del Estado español conquistamos en la práctica el derecho a huelga a pesar del régimen opresor del general Franco, de nuevo volveremos a imponer mediante la lucha el respeto a nuestros derechos laborales.

La condición para que esa victoria sea posible, y que la derrota de su propuesta de Ley de Huelga sea un clavo más en el ataúd del gobierno del PP, es que unifique estas luchas ejemplares con una gran movilización orientada a poner fin definitivamente a la batería de ataques que los trabajadores estamos sufriendo. Por eso es urgente que las direcciones de CCOO y UGT abandonen su fracasada política de “diálogo social” y convoquen como primer paso de la movilización una huelga general que ponga de manifiesto el poder real de los trabajadores.

La experiencia del ayuntamiento obrero de Villaverde del Río a debate

¡Actos en todo el estado con una gran participación y apoyo!

Durante el mes de noviembre la experiencia del ayuntamiento obrero de Villaverde del Río (Sevilla) ha llegado a diferentes ciudades del estado. En siete actos, con una participación de centenares de trabajadores, jóvenes, sindicalistas, comités de parados y Mareas, se ha escuchado el mensaje de Santiago Jiménez y del equipo municipal de IU en Villaverde del Río. Un mensaje que dice alto y claro que sí se puede, que es posible una política en defensa de los trabajadores, de los desempleados, de los más desfavorecidos, y que rechaza con firmeza los recortes, vengan de donde vengan.

En Asturias, Ferrol y Vitoria

El primero de los actos se celebró en Gijón en el Ateneo de La Calzada, el jueves 7 de noviembre, donde ante una sala abarrotada y entre el entusiasmo de la audiencia, Santiago Jiménez desgranó la política revolucionaria del ayuntamiento de Villaverde. Lo mismo sucedió al día siguiente en Ferrol, en el acto que tuvo lugar en la Librería Marxista, y que fue presentado por Javier Losada, miembro del Consello Político Local de Esquerda Unida de Ferrol. Como en Asturias, la reunión tuvo una acogida extraordinaria, con cerca de 60 asistentes, que llenaron completamente el aforo, obligando a muchos de ellos a permanecer de pie. Entre los asistentes, numerosos afiliados y compañeros con responsabilidades en IU, delegados de CCOO, trabajadores de diferentes sectores, jóvenes del Sindicato de Estudiantes, jubilados de los astilleros...

En ambos actos y tras la exposición de Santiago Jiménez, se abrió un turno de palabras muy participativo, con muchas preguntas, reflexiones y también dudas. Todos los asistentes salieron muy satisfechos, y en el caso de Ferrol la Librería Marxista cerró casi una hora después de acabada la charla, por la cantidad de compañeros y compañeras que permanecieron en ella conversando con Santi sobre todo lo que acababan de oír. Xosé María Dobarro, coordinador comarcal de IU de Ferrol, le dedicó su siguiente columna en el *Diario de Ferrol* al acto. Se puede leer aquí (en gallego): goo.gl/UVoNtD

El jueves 14 de noviembre Santiago Jiménez estuvo en el acto convocado en el Centro Cívico Iparralde, en el barrio de Zaramaga de Vitoria-Gasteiz. Allí desarrolló cómo trabajan con el pueblo y cómo confiando en los trabajadores se les ha ido dando confianza en sus propias fuerzas, les han hecho ver que ellos mejor que nadie pueden decidir y ejecutar las distintas obras de forma mucho más eficiente que ningún empresario depredador de beneficios, y que pueden mejorar la calidad del servicio muy por encima del mejor encargado o jefe de obra. A través de asambleas participativas y realmente democráticas han organizado la democracia obrera en el pueblo, de forma que sean los colectivos implicados, parados, jubilados, trabajadores y trabajadoras los auténticos protagonistas. La exposición entusiasmó literalmente a los asistentes. Hubo un debate muy interesante en el que se recordó que, en Euskal Herria, la izquierda abertzale tiene 1.100 concejales, mayor poder municipal que el PNV. Qué no se podría hacer si aplicasen el mismo programa que los compañeros de Villaverde del Río.



El Ateneo Republicano de Vallekas se llenó hasta la bandera

No cabía un alfiler. El acto que organizamos en Vallekas (Madrid) abarrotó el Ateneo Republicano, un lugar de referencia en este barrio trabajador y combativo de la capital. Más de 140 personas se agolparon en el salón de actos: veteranos del movimiento obrero, decenas de militantes de Izquierda Unida de Vallekas y de otras zonas de Madrid, de UGT, CCOO, CGT, de numerosos comités de empresa, grupos de jóvenes del Sindicato de Estudiantes...

Santiago Jiménez dedicó una parte muy amplia de su exposición a explicar las medidas adoptadas por el gobierno municipal: no aplicar ningún recorte a los trabajadores públicos, ni salarial ni laboral (aumento de la jornada); abonar las pagas extras, contraviniendo las decisiones del gobierno del PP y no aceptando la aplicación del artículo 135 de la constitución —la famosa reforma acordada por el PP y el PSOE para garantizar el pago de los intereses a la banca antes que ningún otro gasto público— y, por supuesto, no aplicar ningún recorte social. Izquierda Unida de Villaverde del Río no sólo se ha quedado ahí. En coherencia con su programa, ha remunicipalizado el servicio de limpieza de los edificios públicos de la localidad y el servicio de atención a la dependencia, privatizados por los anteriores gobiernos de coalición del PP-PSOE que se formaron en Villaverde del Río para impedir que IU gobernara (siendo la formación más votada desde el año 2003).

También quedó claro que una corporación obrera si quiere defender los intereses del pueblo, de las familias trabajadoras, tie-

ne que vivir sus mismas condiciones materiales. Por eso en el programa de IU de Villaverde la consigna “concejal obrero sueldo obrero” iba en un lugar muy destacado. Los concejales y el alcalde de IU de Villaverde cobran 1.200 euros netos al mes (14.000 euros al año), muy lejos de esos salarios de 90.000, 100.000 o más euros, que vemos aprobar en muchas corporaciones gobernadas por la izquierda. Cuando Santiago explicó y desarrolló esta idea, el salón de actos se vino abajo en aplausos*.

El programa del grupo municipal de IU de Villaverde del Río y de la inmensa mayoría de la asamblea local cuenta con un apoyo tremendo en la localidad y en las asambleas de IU de Sevilla y de muchas otras de Andalucía. Pero como es bien conocido, esta coherencia ha sido objeto de una persecución antidemocrática por parte de la dirección provincial de IU de Sevilla. Alentados por el coordinador del Consejo Provincial de IU, Manuel Gutiérrez Arregui, uno de los líderes de Izquierda Abierta, la tendencia de Gaspar Llamazares en IU, se propició un golpe de Estado contra la asamblea local de IU, afiliando a lúmpenes y personas completamente ajenas a IU, entre ellas individuos que han actuado como esquiros en la pasada huelga general del 14-N. Es curioso resaltar que los inductores de esta caza de brujas pertenecen a la misma tendencia dentro de IU que hace pocas semanas ha sido protagonista de un incidente vergonzoso, al firmar varios de sus dirigentes junto al juez Garzón una carta de apoyo a Alfredo Pérez Rubalcaba de cara a la conferencia política del PSOE y que fue utilizada contra IU. Como se informó en el acto, la campaña de respuesta contra estas expulsiones ha reco-

gido el apoyo de cerca de mil militantes de IU, de CCOO, de UGT, de CGT, de colectivos de parados, mareas ciudadanas y trabajadores.

En Sabadell, Sant Vicenç del Horts y Tarragona

Los actos en Catalunya se iniciaron el jueves 28 de noviembre en Sabadell con un debate presentado por Lluís Perarnau, coordinador de Entesa per Sabadell y miembro de la Corriente Marxista EL MILITANTE. Participaron unas 40 personas, muchos veteranos militantes de la izquierda, del movimiento vecinal, de los Iaioflautes y también jóvenes del Sindicat d'Estudiants. También participó Miquel Soler, de la comisión política local de EUiA. Además de Santiago intervino desde la mesa la concejala de urbanismo Sonia Yáñez, que desarrolló la política de vivienda que se hace en el ayuntamiento. Al día siguiente se celebró un acto en Sant Vicenç dels Horts, en el otro extremo del cinturón rojo de Barcelona. El amplio salón de actos del centro social Can Comamala estaba a rebosar, con 120 personas, todas las sillas ocupadas y mucha gente de pie. La intervención de Santiago Jiménez, que fue completada con la de Antonio Ruiz, concejal de personal, fue seguida con gran interés, hecho que también se reflejó en las más de 12 intervenciones y preguntas que se hicieron desde el público. El acto estuvo impulsado por las CUP de Corbera y de Sant Vicenç del Horts, y de la activa Asamblea de Parados que existe en la localidad. También estuvieron presentes entre el público activistas de la PAH, la Plataforma Social de Sant Vicenç dels Horts y de EUiA de la localidad. En las intervenciones salieron temas como la cuestión de la vivienda, la unidad de las organizaciones de izquierda, el problema del paro, la corrupción... y se demostró que se puede hacer un acto participativo y muy profundo con colectivos izquierdas con diferentes planteamientos y tradiciones. Lo fundamental es que había ganas de sacar todas las conclusiones de una experiencia en la que una candidatura con una orientación marxista y unos métodos revolucionarios había conseguido ganar las elecciones por mayoría absoluta y aplicar una política verdaderamente a favor de la mayoría. El acto estuvo presentado por Gabriel Jiménez, miembro de las CUP de Corbera y de la Corriente Marxista EL MILITANTE.

El último acto se realizó en la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Aproximadamente 40 personas, entre las que se encontraban afiliados a CCOO, UGT, CGT (con miembros de la Plataforma del Metal), Co.Bas, EUiA y jóvenes del Sindicat d'Estudiants. Además de la intervención de Santiago pudimos escuchar a Paky Bejarano, concejala de Servicios Sociales. Hubo también muchas intervenciones y un interesante debate sobre el trabajo sindical.

* Intervención íntegra en el Ateneo en: goo.gl/yxr3ag.

Más información

- Grupo Municipal de IU de Villaverde del Río: www.vozdelpueblo.org
- Entrevista a Santiago Jiménez en *La Voz de Morón*: goo.gl/wL0hHi
- Entrevista en TeleK: goo.gl/Yimjpn

VIENE DE LA CONTRAPORTADA

A pesar de todo, las zancadillas para que el Sindicato de Estudiantes no pudiera expresar sus puntos de vista se sucedieron desde las cúpulas. El mismo día 30, a las 11:15 horas, cuando estaba prevista la celebración de una rueda de prensa de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, los representantes del Sindicato de Estudiantes denunciaron que, de manera clandestina, sin contar con la opinión de la Plataforma y sus integrantes, sin avisarnos y sin la menor vergüenza, el diputado del PSOE Rafael Simancas y el secretario de Organización del PSOE Óscar López, acapararon los micrófonos para sacarse la consabida foto a costa de la Marea Verde. No es la primera vez. Ya en la movilización del 24 de octubre ocurrió lo mismo. Desde el Sindicato de Estudiantes señalamos que los señores diputados del PSOE tienen todo el derecho a manifestar sus opiniones libremente, pero cuando la dirección del PSOE practica una oposición de terciopelo al PP (proponiendo todos los días Pactos de Estado con la derecha), cuando no exige la dimisión del gobierno, cuando sus dirigentes, como Zapatero, justifican las claudicaciones ante los banqueros cuando gobernaban, y por supuesto, no convocan las movilizaciones educativas y muchas otras, esta forma de conducirse sólo ratifica el tono oportunista de sus actuaciones.

Siguiendo esta línea, al final de la Marcha y una vez en el estrado después de leerse un manifiesto, fui agredida y me impi-

Entrevista a Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes

dieron dirigirme a los manifestantes tal como he hecho otras veces. Es un completo escándalo, y así se lo hicimos saber posteriormente, que miembros de las cúpulas de organizaciones que integran la Plataforma hayan utilizado esos métodos antidemocráticos, completamente ajenos a la Marea Verde, y que niegan el derecho a la libertad de expresión a los jóvenes. La deplorable respuesta que han vertido en algunos medios de comunicación de que “había un acuerdo que el Sindicato de Estudiantes no ha respetado” es aún más escandalosa. Nada puede justificar una agresión física a una joven estudiante. Quien lo justifica se retrata ante el movimiento como lo que es: un burócrata completamente alejado del sentir de la mayoría de los trabajadores y de los jóvenes que luchan. Pero además no existía ningún acuerdo con el Sindicato de Estudiantes. Lo que existía era un intento de taparnos la boca para que no explicásemos a la manifestación que había que dar un paso al frente en la lucha y convocar una huelga general educativa de 72 horas. El Sindicato de Estudiantes, y así lo hemos reiterado, jamás apoyará acuerdos antidemocráticos con el fin de amordazar la libertad de expresión. Igual que estamos en contra de los recortes vengan

de donde vengan, también estamos en contra de impedir la libertad de expresión, venga del ministro del Interior, o de elementos muy molestos con las movilizaciones y la lucha que millones estamos llevando a cabo.

Desde el Sindicato de Estudiantes exigimos disculpas, y las obtuvimos en la reunión que mantuvimos posteriormente de la Plataforma. Así mismo, queremos señalar y agradecer las muestras de apoyo y de indignación por el proceder de sus dirigentes que nos manifestaron al finalizar la marcha cientos de militantes de base de UGT, CCOO, CGT, CEAPA, y posteriormente en las reuniones de la Marea Verde de Madrid y de las Mareas Ciudadanas. Especialmente queremos señalar las muestras de apoyo de decenas de delegados y activistas de CCOO de Enseñanza, que presenciaron escandalizados esos sucesos y con los que hemos trabajado codo con codo. Nada ni nadie va a tapar la boca al Sindicato de Estudiantes, a la juventud que lucha por sus derechos y por su futuro.

EM.— La marcha estatal del 30-N se produjo dos días después de que se aprobase definitivamente la LOMCE en el Congreso, ¿pensáis que se puede echar atrás a pesar de ello?

AG.— Por supuesto que sí. También estaba aprobado el ataque a las becas Erasmus. Aprobado y publicado en el BOE, pero eso no fue ningún inconveniente para que, gracias a la enorme presión social, Wert se tuviera que echar atrás. Nosotros no aceptamos ninguna imposición de una minoría que no tiene apoyo social y quiere devolvernos a la educación de los años 50. La imagen de un Parlamento con mayoría absoluta de la derecha no responde en absoluto a la realidad en las calles, donde todas las falsas promesas y las mentiras con las que el PP llegó al poder han dado paso a la movilización masiva y constante contra un partido salpicado por todo tipo de casos de corrupción y trapicheo.

Si algo se ha demostrado en las movilizaciones de la Marea Verde en estos últimos dos años, y especialmente en los últimos meses, es que hay fuerza de sobra para acabar con la LOMCE, con el ministro y con todos los recortes que la derecha está imponiendo con el único apoyo de grandes empresarios, banqueros y privilegiados de toda la vida. Y para lograrlo apostamos por continuar con una lucha contundente y decidida, con una huelga de 72 horas de padres, profesores y estudiantes.

Huelga de estudiantes el 20 de noviembre



Fuerte movilización en Euskal Herria contra la LOMCE

Ikasle Sindikatua

De nuevo el 20 de noviembre los estudiantes en Euskal Herria hemos vuelto a mostrar nuestro rechazo a la LOMCE y a los recortes educativos del PP, PNV y UPN. En Donosti más de 2.000 estudiantes nos manifestaron en el Campus de Ibaeta, más de 200 en Iruñea, una concentración en Vitoria-Gasteiz a pesar de la intensa nevada que caía, y unas 600 en Bilbao, donde además contamos con la presencia de una delegación de trabajadores de Ede-sa (Fagor) que están luchando en defensa de sus puestos de trabajo, de la Asamblea de Parados de Bilbao, así como de representantes de las Federaciones de Enseñanza de CCOO y UGT.

Y todo ello, pese a que el gobierno vasco ha intentado desmovilizar los centros diciendo que la ley Wert no se iba a aplicar en el País Vasco y se han dedicado a poner todo tipo de trabas a través de las direcciones de algunos centros, con exámenes no programados, faltas y amenazas. Des-

de Ikasle Sindikatua volvemos a pedir la unidad de acción a los compañeros de Ikasle Abertzaleak para luchar a favor de una escuela pública vasca, democrática, laica, científica, gratuita y de calidad. La convocatoria que hicieron un día más tarde con las juventudes de CCOO (Ikasle Ekintza) solo contribuye a dar un balón de oxígeno al PP, UPN y el PNV y resta fuerza a la movilización. La idea de que el gobierno vasco hará “insumisión” a la hora de aplicar las medidas reaccionarias de la LOMCE es falsa, como siempre han demostrado aplican los ataques e incluso los redoblan, y estas declaraciones únicamente tratan de evitar la gigantesca movilización que ya hicimos en octubre. Por eso, hacemos un llamamiento a ELA, LAB, CCOO, UGT, STEE-EILAS y EHIGE a que dejen de hacer declaraciones y pasen a los hechos convocando una huelga de toda la comunidad educativa que ponga freno a la privatización de la enseñanza, a la LOMCE y a los recortes educativos del gobierno vasco y del de Navarra.

Éxito en Galiza

Sindicato de Estudiantes

La huelga del día 20 fue un rotundo éxito en Galicia. Las aulas quedaron vacías y miles de personas nos manifestamos por las calles de las principales ciudades, y en numerosos pueblos se realizaron concentraciones. Más de mil jóvenes nos manifestamos en Coruña y otros tantos en Compostela, cerca de medio millar en Lugo. Muy importante fue también la manifestación de Vigo con cerca de 2.000 jóvenes.

Ferrol: trabajadores y estudiantes se manifiestan juntos

Además, tenemos que destacar que las simpatías que esta movilización despertó entre la clase trabajadora han sido evidente. En el caso de Ferrol los trabajadores del astillero Navantia votaron en asamblea —a propuesta del sector crítico de CCOO dentro de la factoría— hacer un paro en solidaridad con la lucha estudiantil dentro de su calendario de movilizaciones en defensa del empleo. El 20 de noviembre 4.000 personas recorrimos las calles de la ciudad al grito de “obrosos y estudiantes, unidos adelante”, en una

protesta en la que participó el comité de empresa de Navantia y en la que estuvo presente, demostrando el respaldo a la lucha, el coordinador federal de IU, Cayo Lara.

Vigo: ¡dimisión de los responsables de la represión policial!

Por otro lado, desde el Sindicato de Estudiantes denunciaremos la actitud provocadora, agresiva y represora que mantuvo la policía desde el primer momento en el caso de la manifestación de Vigo. Una manifestación que transcurría de manera pacífica hasta que a mitad de recorrido hubo una brutal carga policial que provocó la dispersión de una parte de los manifestantes. Desde el Sindicato de Estudiantes exigimos inmediatamente la libertad sin cargos de los detenidos, así como la depuración inmediata de los mandos policiales implicados y la dimisión de los responsables de esta salvaje represión contra los jóvenes que de manera pacífica luchamos en la calle por nuestros derechos y un futuro digno. Además, hemos iniciado una campaña de denuncia de la represión: hemos pegado carteles y repartido miles de hojas denunciando la criminalización del movimiento estudiantil en centros de estudio y universidades, especialmente

en Vigo, pero también en otras ciudades gallegas. Hemos organizado asambleas en centros de estudio para denunciar la brutalidad policial y coordinar a los estudiantes que fueron agredidos. Una de las asambleas más numerosas tuvo lugar en el IES Beade (Vigo), donde estudia una de las estudiantes golpeada por la policía. En los próximos días el SE interpondrá una denuncia por brutalidad policial contra la policía.



Contra la impunidad del franquismo



Entrevista a la asociación La Comuna - Presxs del franquismo

Coincidimos con La Comuna en las pasadas movilizaciones convocadas contra la LOMCE por el Sindicato de Estudiantes (SE), en la manifestación de Madrid miembros de la asociación se dirigieron a los asistentes para explicar la lucha que, en la última etapa del franquismo, jóvenes y estudiantes libraron contra la dic-

tadura. Embarcados, junto a otras asociaciones, como el propio SE, en la querrela argentina contra los crímenes del franquismo, están realizando una intensa campaña de actos públicos y recopilación de denuncias para incorporar a la querrela. Su principal reivindicación es el fin de la impunidad de los crímenes del franquismo, y

luchan, entre otras cosas, por la derogación de la Ley de Amnistía de 1977. El 28 de noviembre, nos citamos con Raúl Herrero Solano y Jesús Rodríguez Barrio de La Comuna, en el local del Sindicato de Estudiantes para hacerles la entrevista que ofrecemos a continuación (puedes leerla completa en www.elmilitante.net).

EL MILITANTE.— ¿Cuál es la motivación que os lleva a crear una nueva asociación memorialista, La Comuna, y cuáles son vuestras señas de identidad?

La Comuna.— Hay un grupo de presos y represaliados por el franquismo que, por edad, nunca nos hemos sentido parte de esa generación de viejos presos del PCE que habían estado muchos años en la cárcel y que relacionaban su pasado con la guerra civil y la posguerra. Nosotros habíamos vivido sobre todo el final del franquismo, los años del Tribunal de Orden Público (TOP), éramos los presos más jóvenes. Nos dimos cuenta de que en la memoria histórica había un hueco que nadie ocupaba, el de la gente que estuvo en la cárcel al final del franquismo, incluso gente que había participado en la Transición, que es para nosotros parte del franquismo. Los años que van de 1975 a 1981 fueron franquismo de lo peor; de 1963 al 76, es decir en 13 años, hubo 70 muertos como consecuencia de acciones policiales, condenas a muerte, asesinatos fascistas y muertos en la misma cárcel por torturas. Pero en los seis años que van de la muerte de Franco al golpe de Tejero hay contabilizados 140. Además, hubo 50.000 personas encausadas por el TOP, de los que se llegó a procesar a unas 8.000.

EM.— ¿Cuál es la situación actual de los responsables vivos de la represión en el franquismo?

LC.— Ha habido una impunidad total que dura hasta el día de hoy. El 1 de diciembre convocamos una marcha en Leganés porque precisamente el jefe de policía es un antiguo torturador de la Brigada Político Social (BPS). Además, el aparato del Estado franquista permaneció intacto. Esto explica cosas como que, a día de hoy, el núcleo duro de la judicatura española siga siendo franquista. Si analizas los nombres y apellidos de los jueces que formaban parte del TOP enseguida te resultan familiares; hay apellidos como Mariscal De Gante o Torres Dulce, todos antepasados de ministros, fiscales generales, gente que ocupó altos cargos en el aparato franquista. Lo mismo sucede en el Consejo General del Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional.

Ocupando puestos con responsabilidad y con mando ya quedan pocos. Martín Villa, por ejemplo, que sigue estando en la cúpula económica (Prisa, Sogecable). A los 25 años se subió a un coche oficial y aún no se ha bajado.

Es muy difícil saber dónde están todos los que siguen vivos, que son muchos. Es parte del trabajo que estamos haciendo de recopilación de información. Entre esa gente están los torturadores que han puesto electrodos en los testículos a la gente y les han metido cosas en la vagina a las mujeres, o han dejado en carne viva los pies de la gente en las comisaría; no es que hayan seguido viviendo como si nada, sino que lo han hecho como ciudadanos ejemplares, con placas en su honor, condecoraciones y homenajes. Ese es el código moral que se implantó con la transición: los delincuentes como *Billy el Niño*, fueron condecorados y premiados por ministros de la democracia, y las víctimas éramos unos delincuentes a los que se nos había perdonado. Mientras nosotros peleábamos ellos hicieron sus carreras, medraron... Para ellos somos unos resentidos.



En realidad, somos personas que buscamos justicia, no sólo por nosotros, sino por la cantidad de gente que no se ha atrevido a hablar, que aún hoy tiene miedo a hablar en público porque saben que este país está lleno de fachas que siguen en el poder.

EM.— ¿Qué valoración hacéis del papel que jugó la izquierda política y sindical en el periodo de la Transición?

LC.— Muy mala. Un aspecto que forma parte de la columna vertebral de nuestro ideario es un juicio muy crítico de todo lo que fue el final del franquismo y de cómo lo gestionaron partidos y sindicatos. En ese juicio crítico englobamos al núcleo principal de la lucha contra el franquismo, que era el PCE, que dio el visto de respetabilidad a los “nuevos demócratas”, que en realidad eran “viejos franquistas”, y les avalaron ante la masa de los luchadores antifranquistas. Aunque hubo también mucha oposición lo cierto es que la gente pensaba que si ellos, los luchadores de toda la vida lo aceptaban, habría que aceptarlo.

El PSOE perdió una gran oportunidad cuando gobernó en la primera legislatura, una vez que había fracasado el golpe de Tejero y tenía mayoría absoluta. Ahí es cuando la gente pedía una limpieza, pero no hicieron nada.

EM.— A raíz de la vía abierta a través de la querrela argentina para juzgar los crímenes del franquismo se ha generado una gran expectativa. ¿Qué respuesta estáis encontrando en el movimiento y cuáles son las principales dificultades?

LC.— La respuesta está siendo extraordinaria, nuestra influencia y nuestra audien-

cia está muy por encima de nuestra capacidad organizativa. Nos llaman para ir a muchísimos sitios y la verdad que no podemos ir a todos. Estamos haciendo charlas en todo el estado y hoy mismo viaja una delegación de compañeros a Argentina para continuar con el trabajo de la querrela.

A la derecha, a los franquistas y sus herederos en la actualidad, lo que les descoloca es la opción de juzgar a represores vivos por parte de represaliados vivos, y encontramos todo tipo de dificultades para obtener información. Sabemos que las fichas que hacían en la BPS de nuestras vidas están en algún sitio guardadas y no han desaparecido. Ahí figura quiénes eran los policías que nos investigaban, quién te seguía, quién daba las informaciones, quién te torturaba, etc. Hemos podido acceder a una parte del Archivo Histórico Nacional donde consta información nuestra, con eso hemos podido saber algunas cosas, porque estas actas están firmadas por policías. Todo esto lo hemos presentado para la causa en Argentina. Por ejemplo, sabemos que el actual jefe de policía de Leganés fue uno de los que interrogó a uno de los querellantes, miembro de La Comuna, porque el acta de su interrogatorio la firma él, Jesús González Reglero.

EM.— ¿Cómo vivíais y afrontabais la represión en el día a día de vuestra militancia antifranquista?

LC.— Era un tema del que se hablaba mucho en las reuniones de las células; se veían protocolos de comportamiento, nos mentalizábamos de qué era lo que había que hacer. Las detenciones duras eran las que estaban orientadas a desarticular una organi-

“La historia que nosotros reivindicamos es la de la gente que lo dio todo por conseguir los derechos y las libertades que precisamente hoy nos tratan de arrebatar”

zación, porque entonces los interrogatorios iban dirigidos a sacar información sobre las actividades de la organización y a que se dieran nombres, y ahí es cuando la policía se empleaba a fondo.

Cuando entrabas en la DGS era como si recibieses de golpe un curso acelerado de lo que era la dictadura, veías a la policía en su salsa, cómo trataban a los detenidos, y salías de allí mucho más reafirmado en la idea de que había que acabar con aquello. Paradójicamente, cuando se acababan los interrogatorios en la DGS y te trasladaban a la sede del TOP la sensación que había era de liberación. Al llegar a la cárcel los otros presos te acogían con los brazos abiertos, y tenías la sensación de que habías salido de las garras de aquella gente.

EM.— En vuestra presentación pública señalabais que “las conquistas políticas y sociales, que se consiguieron con el sacrificio de la lucha antifranquista, se encuentran hoy gravemente amenazadas por las políticas antisociales y represivas de la derecha extrema que gobierna en nuestro país”. ¿Cuál es el hilo conductor que reivindicáis entre entonces y ahora?

LC.— Este país tiene una enorme deuda con la generación de militantes y luchadores no ya sólo de la izquierda sino con lo que se conoce como “extrema izquierda”, las organizaciones políticas que estaban a la izquierda del PCE y del PSOE, y que tenían miles de militantes. Esa gente arriesgó todo para derribar el franquismo; muchos dejaron los estudios, perdieron el trabajo y han tenido grandes problemas de salud, porque en aquella época se vivió muy mal, y nunca se les ha reconocido ese sacrificio.

Crear La Comuna ha sido también un acto de orgullo. La idea de que la democracia la hicieron unos señores que hicieron componendas es mentira. Por la DGS no pasó ningún liberal de derechas, esos no lucharon contra Franco porque vivían muy bien en el franquismo. En la DGS todos eran comunistas de diversas tendencias, anarquistas, sindicalistas, todos ellos gente militante de la izquierda y esa es la historia que nosotros reivindicamos, la de la gente que lo dio todo por conseguir los derechos y las libertades que precisamente hoy nos tratan de arrebatar. Por eso desde La Comuna decimos que defender la libertad y la justicia es más necesario hoy que nunca: quienes participen en esa lucha nos encontrarán siempre a su lado.



El 21 de diciembre el PP completará dos años en el gobierno. Durante este periodo la derecha ha emprendido los mayores ataques a la clase obrera y la juventud desde la caída de la dictadura, y tiene previsto continuar en esta línea hasta agotar la legislatura. La combinación de los efectos de la crisis capitalista y una sucesión continua de contrarreformas y recortes están provocando una acelerada degradación de las condiciones de vida de la inmensa mayoría, una verdadera catástrofe social que no tiene nada de "coyuntural" ya que, si no lo impedimos con la lucha, va a marcar el futuro de las actuales y venideras generaciones. ¿Y todo eso en aras de qué? De los intereses de la oligarquía financiera y de los grandes empresarios. Es a los bolsillos de esta ínfima minoría social donde va a parar todo el dinero que se sustrae de la sanidad y la educación públicas, de las pensiones y de otros servicios fundamentales para la gran mayoría de la gente. En un intento desesperado de contrarrestar su total deslegitimación social el gobierno insiste machaconamente en la idea de que la economía española está saliendo de la crisis y de "que los sacrificios empiezan a dar sus frutos". Otra mentira más de la que son tan pródigos Rajoy y sus ministros.

Recortes salvajes e interminables

A lo que estamos asistiendo es a una guerra de clase, a un verdadero atraco social y el saldo es estremecedor. Desde el primer momento, el gobierno del PP pasó a la ofensiva. El 30 de diciembre de 2011 aprobó un decreto de medidas urgente, imponiendo el hasta entonces mayor recorte de gasto público de la historia reciente (8.900 millones de euros, una cifra ampliamente superada en medidas posteriores) y una importante subida de impuestos, afectando fundamentalmente al IRPF y al IBI. El 27 de enero de 2012 aprobó el anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria de las Administraciones Públicas, que refuerza la política de recortes sociales y la priorización del pago de la deuda en todas las administraciones (desarrollando la reforma de la Constitución aprobada por el PSOE y el PP durante el gobierno de Zapatero). En febrero aprobó una brutal reforma laboral que abarata la indemnización por despido improcedente y destruye los convenios colectivos. Con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2012, a finales de marzo, impuso un recorte adicional de 20.000 millones; paralelamente dio luz verde a una escandalosa amnistía fiscal que afectaba a 25.000 millones de euros defraudados a Hacienda por las grandes fortunas. Además, el gobierno congeló los sueldos de los funcionarios (incrementando su jornada laboral) y el salario mínimo profesional, y las pensiones subieron un mísero 1%.

En abril del mismo año volvió a imponer una nueva tanda de recortes de 10.000 millones, repartidos entre Educación (3.000 millones) y Sanidad (7.000 millones). Aprobó el copago farmacéutico (los pensionistas pagan el 10% del precio de las medicinas con un tope de entre 8 y 18 euros en función de la renta, y se restringe la asistencia sanitaria a los inmigrantes ilegales, incluidas sus familias). En julio, siguiendo los dictados de la troika el gobierno se comprometió a recortar 65.000 millones de euros en dos años. El plan incluía una fuerte subida del IVA, la supresión de la paga de navidad a los funcionarios más la supresión de los días libres, la reducción del 10% del subsidio del desempleo a partir del sexto mes de su percepción.

Ya en el año 2013, Rajoy prepara dos nuevas y brutales contrarreformas: la de las pensiones, con la que el gobierno pretende "ahorrar" 33.000 millones en los próximos nueve años, a costa del poder adquisitivo de los más mayores (la propia vicepresidenta ha reconocido que las pensiones perderán un 18% del poder adquisitivo en los próximos tres años) y la LOMCE, conocida como ley Wert, que implica un retroceso histórico para la educación pública a las cavernas educativas del franquismo. A esto hay que sumar el recorte de becas, el incremento de las tasas universitarias y la instauración de las tasas en la Formación Profesional. Un conjunto de medidas encaminadas a expulsar del sistema educativo a los jóvenes de las familias obreras. Paralelamente se da una nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral, y se preparan unos presupuestos para 2014 que incluyen ajustes adicionales para ayuntamientos y comunidades autónomas de 17.500 millones de euros para los dos próximos años.

lamente se da una nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral, y se preparan unos presupuestos para 2014 que incluyen ajustes adicionales para ayuntamientos y comunidades autónomas de 17.500 millones de euros para los dos próximos años.

Una catástrofe social

La crisis capitalista, los recortes y contrarreformas del PP han convertido la sociedad española en la más desigual de la Unión Europea. La diferencia entre el 20% más rico de la población y el 20% más pobre es de siete veces. Jamás se había alcanzado tal contraste.

En dos años se han destruido un millón de empleos. La mitad de ellos, en el sector público. Según CCOO, en el sector educativo se han perdido 31.000 y en el sector sanitario 50.000. El paro afecta ya a 6 millones de personas, un 26% por la población activa. Entre los jóvenes la tasa asciende al 54,37%. Los parados de larga duración, los que llevan más de un año sin trabajar, se han multiplicado por nueve desde el inicio de la crisis. Según el INE, en el tercer trimestre de 2013 la cifra total de personas en esa situación es de 3.456.400, de los que más de la mitad llevan dos años o más sin encontrar empleo, por lo que han perdido ya la prestación. Hay 1.845.571 parados que no reciben nada del Estado (*Cuarto Poder*, 02/10/13). Según la EPA son 1.821.100 los hogares en los que todos los miembros están en paro.

Además, la situación de precariedad sigue extendiéndose entre los que trabajan. En el tercer trimestre, mientras que el número de contratos indefinidos se redujo en 146.300 personas, los contratos temporales se incrementaron en 169.000. La pérdida del poder adquisitivo de los salarios está siendo verdaderamente brutal. Según los datos del Banco de España los costes laborales unitarios se redujeron un 5,4% en términos reales en 2012, y otro 4,8% de enero a agosto de 2013; en conjunto y siempre en términos reales, la pérdida de poder de compra de los trabajadores se ha reducido en más de un 10%. El dinero restado a los salarios va a parar a los bolsillos de los empresarios que, además, gracias a la reforma laboral del PP, han visto reducidos los costes del despido en un 24%.

A pesar de la baja inflación oficial, el hecho es que los gastos básicos de las familias trabajadoras no paran de subir. Según *La Vanguardia* el gas, el agua, la electricidad, el teléfono, etc., lo ha hecho en un 50% desde el inicio de la crisis. Se calcula que empleados públicos, pensionistas, parados y un 80% de los asalariados perderán poder de compra en 2014.

Según un informe de Cáritas de octubre, la pobreza grave se ha duplicado desde 2007, llegando a los tres millones de personas. En esta dramática situación el gobierno del PP ha excluido de prestación sanitaria a 873.000 personas. El número de personas en riesgo de pobreza y "exclusión social" afecta a casi el 30% de la población

Dos años de pesadilla e ¡Sí se puede tum los banqueros y o



y se incrementa año tras año como consecuencia de la crisis capitalista y de los recortes.

Mientras tanto, los ricos son más ricos. Los beneficios de las empresas que configuran el Ibex 35 de la Bolsa han crecido un 13% en los tres primeros trimestres de 2013. Los consejeros de las empresas del Ibex, con una media salarial de 562.000 euros anuales, subieron su remuneración en un 7,6% en lo que va de año. Bajo el gobierno de Rajoy han aumentado las personas que viven con menos de 307 euros al mes a la vez que se ha incrementado en un millón el club de millonarios, que ha ganado miembros en la primera mitad del año: hay 47.000 personas más con un patrimonio superior al millón de dólares (unos 738.000 euros), según los números que recopila cada año Credit Suisse, lo que significa un aumento del 13%, el octavo mayor registrado en el mundo.

La banca está recuperando sus beneficios a costa de especular con la deuda pública que ella misma ha provocado como consecuencia de los rescates. La adición del sector financiero al llamado "carry trade", consistente en pedir préstamos casi gratis al Banco Central Europeo y luego prestar al Estado al 4% a diez años, se ha incrementado en los últimos meses. Las entidades españolas, según el informe del Bundesbank, han incrementado sus títulos de deuda pública desde los 166.000 millones de euros en noviembre de 2011 a los 299.000 millones en septiembre de 2013, un 81% más en menos de dos años. De esta manera, el conjunto de las entidades financieras de crédito poseen el 45% del saldo vivo de la deuda pública española, que asciende a 664.000 millones. Una cuarta parte de los ingresos de la banca provienen de los intereses que les rinde la deuda pú-

blica. El divorcio entre la banca y la economía productiva se ha acentuado con la crisis, y su naturaleza parasitaria se ha incrementado aún más.

¿Salida de la crisis?

La transferencia de riqueza de los más pobres a la oligarquía financiera es cristalina. Con la estafa de las preferentes, legalizada por el gobierno del PP, se ha aplicado en el Estado español un corralito descarado, y puede que no sea el último. La banca ha sido, sin duda, la gran beneficiaria de la política del PP. Si se suma el dinero en efectivo, las garantías contra pérdidas, los préstamos y los avales a la banca, se llevan desembolsados 275.000 millones de euros procedentes de las arcas públicas. En relación al PIB es la mayor cantidad empleada en los rescates bancarios del llamado mundo capitalista "desarrollado". A pesar de que el ministro de Economía tuvo la desfachatez de afirmar que "el rescate bancario no costará un solo euro al contribuyente" ya se han perdido, con reconocimiento oficial, 45.000 millones (36.000 millones que el FROB da por incobrables y 9.000 millones a fondo perdido de Caja Castilla La Mancha).

Como denunciábamos en estas páginas desde un primer momento, el préstamo de la UE para el rescate bancario tendrá que ser devuelto con dinero público, a costa de futuros recortes y subidas de impuestos indirectos y otras tasas. La factura se incrementará cuando se tengan que hacer efectivos los avales públicos a operaciones bancarias fracasadas... La creación del Sareb (el banco malo), que ha absorbido construcciones y terrenos invendibles de los bancos a precios privilegiados y ha asumido deudas incobrables, es una estafa social de una escala gigantesca. En el último Con-

Es más que suficiente Tumbarlo al gobierno de los empresarios!



sejo de Ministros de noviembre el gobierno de Rajoy ha decidido avalar a la banca con otros 30.000 millones para asegurar un tipo de "activo", los DTA¹. Sin esa cobertura la banca española no superaría las nuevas "pruebas de estrés" que Bruselas tiene previsto realizar. A pesar de todas las ayudas públicas millonarias e ilimitadas a la banca, el peligro de que el sistema financiero español estalle por los aires sigue presente². Por supuesto, esta situación, que entraña un peligro económico y social de consecuencias imprevisibles, no impide que los banqueros y especuladores sigan repartiendo beneficios a manos llenas.

En términos "macroeconómicos" el saldo de los dos años de gobierno Rajoy no puede ser más desastroso. En dos años la deuda pública ha crecido un ritmo jamás alcanzado en ningún otro periodo histórico, superando ampliamente el 100% del PIB. El déficit (cuyo objetivo de reducción ha justificado todos los recortes) ascendió el pasado año al 10,6%, contando las ayudas a la banca. La deuda de las familias, pero sobre todo de las empresas y de la banca no han disminuido sustancialmente, con lo que el proceso de "desapalancamiento" dista mucho de haber concluido, siendo esto una condición necesaria para el inicio de un ciclo económico ascendente. Algunos analistas apuntan incluso a que el problema del endeudamiento privado se puede agravar aún más como efecto de la deflación (disminución de precios), cuya consecuencia es el incremento relativo de la deuda acumulada sobre la facturación de las empresas. Si la tensión sobre la prima de riesgo española ha remitido en el último año es por la inyección sin precedentes de liquidez que sigue bombeándose desde el BCE. Sin ella, tanto la economía española como una buena parte de la economía europea, colap-

saría. Pero la baja de la prima de riesgo y el aumento de la Bolsa no tiene nada que ver con la economía real. Aunque parezca mentira, se está produciendo otro boom especulativo en plena crisis, sin que se hayan resuelto las enormes contradicciones generadas por el pinchazo del boom inmobiliario. Un nuevo "susto" en los mercados financieros internacionales, por cualquier accidente, pondrá de nuevo todas las contradicciones al descubierto.

La economía española dista mucho de haber superado la crisis, tanto en lo que se refiere a la crisis financiera como a la "economía real", que en último término es determinante. De entrada, la tan cacareada "recuperación" del PIB es realmente raquítica, de un 0,1% en el tercer trimestre. Según datos del BBVA de noviembre "en 2013 se mejora marginalmente el crecimiento en una décima, con una caída estimada del -1,3% y se espera que en el 2014 la economía crezca el 0,9%, manteniendo así la expectativa de una recuperación moderada. En estos momentos la economía estaría creciendo alrededor de un 0,3% en el cuarto trimestre, según los indicadores disponible hasta hoy."

Esto no es una recuperación, es una continuidad de la recesión y, en muchos aspectos, de la depresión que sufre la economía y el empleo en el Estado español desde hace seis años. El FMI reconoce que para que el crecimiento tuviese un "impacto real" reseñable, debería ser del 2% o del 3%. Todos los datos a los que el gobierno del PP se agarra para probar un cambio de tendencia son realmente endeble. Montoro afirmó que "el dinero entra a raudales en España", sin embargo la inversión productiva total del primer semestre de 2013 es similar a la del mismo semestre de 2012 (6.800 millones) cuando se había producido una caída del 56% respecto al trimestre

anterior. Otro dato estrella es el de las exportaciones pero, en un contexto internacional y europeo de crecimiento muy lento o de estancamiento, el incremento de las mismas se está ralentizando (las exportaciones de bienes han aumentado un 2,5% frente a 11,9% del trimestre anterior; las importaciones han descendido un 3,3%). La venta de automóviles se ha incrementado un 1,1% en los 10 primeros meses, una subida raquítica después de 3 años consecutivos de descensos tremendos. La producción industrial se incrementó un 0,1% en el tercer trimestre, pero lleva una pérdida acumulada ¡del 30% desde 2007! El consumo ha aumentado un 0,1% en el tercer trimestre pero lleva una caída acumulada del 12% desde 2007.

¡Huelga general ya!

La ofensiva del gobierno del PP ha desatado el mayor movimiento de contestación social desde la Transición. La lista de movilizaciones en las que los trabajadores y los jóvenes han demostrado su fuerza y su voluntad de lucha es larga: la gran huelga indefinida de los pozos mineros y la marcha minera a Madrid; las movilizaciones masivas de los empleados públicos en julio de 2012; las ocupaciones de fincas y la marcha de los jornaleros andaluces; la marcha estatal a Madrid del 15 de septiembre de 2012; la movilización de decenas de miles en Madrid para rodear el parlamento el 25-S, la represión policial brutal y la manifestación aún más masiva del 29-S; la huelga general en Euskal Herria el 26-S y la segunda huelga general en todo el Estado el 14-N de ese mismo año.

La lucha en el frente educativo, contra los recortes y la ley Wert ha sido también muy intensa: en octubre de 2012 y febrero 2013 el Sindicato de Estudiantes convocó dos huelgas de 72 horas, que contaron con una participación masiva de los estudiantes y el respaldo activo del profesorado y los padres. El 9 de mayo la participación en la huelga general de toda la comunidad educativa (de infantil a universidad) en todo el Estado volvió a ser multitudinaria, dejando claro que el gobierno estaba totalmente aislado defendiendo la LOMCE y que las espaldas quedaban en alto para el siguiente curso. Efectivamente, el curso 2013-2014 ha empezado con la impresionante huelga indefinida de los profesores de Baleares, que ha contado con una participación multitudinaria y con la convocatoria por parte del Sindicato de Estudiantes de una nueva huelga de estudiantes de 72 horas que culminó con una nueva huelga general de toda la comunidad educativa en todo el Estado (22, 23 y 24 de octubre), con un éxito histórico, la huelga del 20-N y la marcha a Madrid el 30 de noviembre. También merece una mención el movimiento contra los desahucios encabezados por la PAH, que cuenta con un apoyo masivo entre la población. Y la lucha de la Marea Blanca contra los recortes en la sanidad pública que en Madrid, donde el movimiento ha alcanzado un grado altísimo de participación y de autoorganización, ha conseguido conquistas parciales importantes como la parálisis, por decisión de un tribunal, de los planes de privatización de varios hospitales y centros de salud. La impresionante huelga indefinida de la limpieza viaria y jardinería en Madrid y su victoria contra los planes de despidos masivos y reducción general de los salarios...

Todas las medidas represivas que el gobierno del PP está emprendiendo contra la movilización de los trabajadores y de la juventud (Reforma del Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana y Ley de Huelga) es algo muy serio. Demuestra que la burguesía se está preparando para un incremento de la lucha de clases y para la revolución,

no para la recuperación económica y el fin de los recortes. Pero estas medidas represivas también reafirman otra idea importante: la de que el gobierno del PP es un gobierno débil y cada vez más desesperado.

El principal factor que propició la victoria del PP en noviembre de 2011 fue el profundo descrédito de la política socialdemócrata y su capitulación total frente a la presión de los poderes económicos, nacionales e internacionales, que tuvo un claro efecto desmovilizador en la izquierda en el plano electoral. Eso se combinó con las expectativas que todavía conservaban amplios sectores de las capas medias en que el PP podría resolver rápidamente la crisis y devolverles al periodo anterior de "vacas gordas". Dos años después la situación ha cambiado radicalmente. El impacto de la movilización de masas, y no la lamentable y titubeante oposición de Rubalcaba y sus continuos llamamientos a la derecha a un gran pacto social, es lo que está contribuyendo decisivamente a crear este clima de aislamiento del gobierno del PP. El caso Bárcenas ha completado el cuadro, evidenciando la corrupción generalizada que reina en el PP y poniendo aún más a la clara que el gobierno de Rajoy está al servicio de los capitalistas.

En el Estado español la tarea más urgente es unificar la lucha de todos los sectores afectados por la brutal ofensiva emprendida por el PP, en un movimiento huelguístico contundente y que vaya a más. Las direcciones de CCOO y UGT están recurriendo a la táctica del avestruz y mirando para otro lado, negándose a convocar una huelga general. Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, muy acertadamente, ha exigido la dimisión de Rajoy y la convocatoria de elecciones anticipadas. La cuestión es qué hacer para conseguir este objetivo. En nuestra opinión un llamamiento claro, directo y público desde la dirección de Izquierda Unida a los dirigentes de CCOO y UGT a rectificar su actual posición, y apoyar la campaña por la dimisión del gobierno y por la convocatoria de elecciones generales, y a convocar una huelga general por estos objetivos, contaría con un respaldo masivo en la base de estos sindicatos. Sería un revulsivo político tremendo para millones de trabajadores y jóvenes. Impulsar un movimiento masivo y continuado es fundamental no sólo para conseguir tumbar al gobierno del PP y evitar otros dos años de sufrimiento sino también para que esta caída lleve a la elección de un gobierno de izquierdas, con un verdadero programa de izquierdas, que empiece por derogar todas las contrarreformas y todos los recortes a los gastos sociales impuestos por la derecha y que nacionalice todo el sistema financiero y las grandes empresas, para poner en práctica un plan en defensa de los intereses de la mayoría de la sociedad, de rescate de las personas, de los servicios sociales, que impulse la creación de millones de puestos de trabajo, y que se oponga intransigentemente a cualquier recorte de las libertades y los derechos democráticos.

**¡Únete a los marxistas
 de EL MILITANTE para luchar
 por esta alternativa socialista!**

1. Los DTA son gastos con impacto en las cuentas de los bancos pero sin deducir en el pago de impuestos y que generan un derecho a futuro contra la Hacienda Pública.

2. Efectivamente, la morosidad no para de crecer y es mucho mayor de lo que revelan las cifras oficiales. Según Bank of America/Merrill Lynch, en su informe de septiembre, "la morosidad, incluyendo los dudosos activos transferidos a Sareb, asciende a 222.000 millones, o el 21% del PIB, frente al 12% oficial. Pero si incluimos los refinanciados, de los que un 40% son problemáticos, y otros similares, la morosidad potencial es de 350.000 millones o el 34% del PIB". El FMI acaba de estimar que se necesita ya otra recapitalización de 61.000 millones.

Adrià Monfort

La neutralidad de España durante la Primera Guerra Mundial permitió a los capitalistas y oligarcas españoles hacer un gran negocio gracias al desabastecimiento de productos en la Europa en guerra. Sin embargo, los enormes beneficios no repercutieron en una mejora en las condiciones de vida de las masas. La subida del precio de los alimentos básicos y el aumento del desempleo crearon las condiciones para un auge del movimiento huelguístico a partir de 1916.

La huelga general convocada por CNT y UGT en unidad de acción en diciembre de 1916 tiene un seguimiento muy importante, pese a lo cual no recoge ninguna concesión del gobierno. La radicalización del movimiento obrero y su disposición a la lucha cristalizan de nuevo durante la crisis de 1917.

La gran huelga de agosto de 1917

Los preparativos de la gran huelga de agosto de 1917 anticipan los motivos de su derrota: los límites impuestos por su dirección. El PSOE y la UGT conformaron el mal llamado "comité revolucionario" en colaboración con partidos republicanos burgueses (el Partido Republicano Radical de Lerroux y el Partido Reformista de Melquíades Álvarez). La CNT colaboró extraoficialmente con el comité en Catalunya y mantuvo contactos con los republicanos burgueses catalanes. De sus objetivos (una nueva Constitución y más democracia) se desprendía una táctica de colaboración de clases, pretendiendo recabar el apoyo de las Juntas Militares* y de la Asamblea de Parlamentarios auspiciada por la burguesía catalana.

La burguesía catalana, con su Lliga Regionalista de Francesc Cambó, mantuvo una política ambivalente. Por un lado, sostener y mantener al gobierno central, ya que dependía de sus cañones y soldados para reprimir las huelgas obreras; y por el otro, tratar de encauzar el descontento social para diluirlo, creando ilusiones en una reforma constitucional por arriba para salvar el capitalismo español de una revolución por abajo.

Frente a la claudicación más clamorosa de los sectores "progresistas y liberales" de la burguesía (la burguesía catalana, los republicanos burgueses y la oficialidad del ejército), la clase obrera sí dio muestras de su disposición a la lucha revolucionaria. El 13 de agosto se inicia una huelga que se extiende durante una semana aproximadamente por todo el Estado, y pese a la combatividad de los trabajadores, que se enfrentaron a la represión de los militares en varias ciudades, finalmente fue derrotada. A pesar de lo cual el movimiento huelguístico se sigue extendiendo, el movimiento por la amnistía de los encarcelados toma relieve y el movimiento obrero aumenta en conciencia de clase y organización. Es el principio del fin del régimen de Restauración Borbónica, que durante décadas había manejado los negocios de los capitalistas con un sistema bipartidista de poder.

El trienio bolchevique

La revolución rusa de Octubre de 1917 supone un terremoto en todo el mundo, especialmente en Asia y Europa. Por primera vez en la historia, con la honrosa excepción de la Comuna de París casi cuarenta años atrás, los oprimidos toman el poder, expropiando a los burgueses y terratenientes, e inician el camino de una sociedad sin opresión de clase. La palabra bolchevismo recorre la mente de millones de oprimidos.



Memoria Obrera

El Trienio Bolchevique (1918-1920): ensayo general de la revolución



El Estado español no es ajeno a este auge de la lucha de clases mundial. El campesinado toma el relevo del movimiento obrero y emprende una impresionante movilización de masas. Miles de campesinos pobres y jornaleros de las grandes fincas de los caciques andaluces se lanzan a la lucha con sucesivas huelgas generales, ocupaciones de fincas improductivas y la proliferación de sociedades y organizaciones obreras en los pueblos y aldeas. Se pasa de 1'8 millones de jornadas perdidas en huelgas en el campo en 1917, con 71.400 huelguistas, a 7,3 millones de jornadas y 244.700 huelguistas en 1920. Centenares de cortijos amanecen con pintadas de "¡Viva Rusia!". Era posible el anhelado deseo de que la tierra fuera para quien la trabaja.

El movimiento campesino confluye con el movimiento obrero, que tras la derrota de agosto de 1917 se recompone con fuerza y celeridad. Ante la profundización de la política de pactos con los republicanos burgueses de los dirigentes del PSOE y los métodos rutinarios y burocráticos de la UGT, la CNT da cauce a las aspiraciones revolucionarias de las masas, y experimenta un poderoso impulso al convertirse en un verdadero sindicato de masas. Mientras la propaganda anarcosindicalista loaba los logros de la revolución rusa, los trabajadores acuden en masa a la central anarcosindicalista.

La huelga de La Canadiense

El movimiento obrero, alentado por las lecciones de la derrotada huelga de agosto, el impacto de la revolución rusa y la combatividad e incansable actividad sindical revolucionaria de los *cenetistas*, dispara su acción combativa durante el trienio bolchevique. En 1919 se perdieron sólo en Barcelona 3,25 millones de jornadas de trabajo en huelgas que implicaron a 156.000 obreros. La represión militar y la actitud insolente de la burguesía catalana (la Lliga Regionalista), lejos de amedrentar el movimiento, lo espolea.

El 5 de febrero de 1919 se inicia la huelga en la Compañía de Fuerza e Irrigación del Ebro, conocida como La Canadiense, contra el despido de ocho trabajadores. Cuando los trabajadores se ponen en huelga y rechazan la oferta de la empresa de readmitirlos pero con un menor salario, la empresa despide a otros 117. Los trabajadores de La Canadiense no tenían organización ni experiencia sindical, pero

con el apoyo de la CNT consiguen extender el conflicto hasta paralizar el 70% de las fábricas de Barcelona.

La patronal intentó reventar la huelga, pero ni la militarización de los empleados del sector, ni los tres mil encarcelados en Montjuïc, ni el estado de guerra decretado en la provincia, fueron suficientes. Tras 44 días de conflicto, se alcanzó un acuerdo: readmisión de todos los despedidos, liberación de los encarcelados, el pago de los salarios por los días de huelga y el aumento de los jornales. En el mes de abril el gobierno firma el decreto de la jornada de ocho horas, consecuencia directa del conflicto en La Canadiense. Una gran victoria.

Reforma o revolución

En esta situación, afloran dos enfoques claramente diferenciados en la dirección de la CNT, que de forma distorsionada reflejan las tensiones entre las tendencias reformistas y revolucionarias en el movimiento. Durante el trienio bolchevique se dan las condiciones idóneas para construir una organización revolucionaria que se plantea ganar a las amplias masas para la estrategia de la toma del poder, mediante la formación de juntas revolucionarias a partir de los órganos de lucha surgidos de las huelgas y su coordinación a nivel local, regional y estatal. Sin embargo, ninguna de ambas tendencias adopta esta posición.

En un extremo, los llamados "puros" o "intransigentes" sentían que desarrollaban la táctica bolchevique, pero esto por sí solo no implicaba haber asimilado las lecciones esenciales de la historia del bolchevismo ni de la propia revolución rusa. Sustituían con sincero ardor revolucionario y empuje la incompreensión del programa, estrategia y tácticas que permitieron al partido bolchevique conquistar el apoyo consciente de las masas para tomar el poder. Tras la exitosa huelga de La Canadiense, se lanzaron a una ofensiva general de huelgas que buscaba desencadenar una insurrección armada, sin preparación previa ni plan alguno. Esta táctica, o más bien la ausencia de una táctica y estrategia para la toma del poder, ponía a los trabajadores a merced de las provocaciones de la burguesía.

En el otro extremo de la dirección anarcosindicalista, los dirigentes encabezados por Salvador Seguí veían con recelos dicha táctica, al poner en riesgo el que consideraban que era el objetivo principal: consolidar a la CNT como la principal or-

ganización de lucha económica de los trabajadores, apartando del orden del día la cuestión del poder y la revolución.

Ambas tendencias compartían los esquemas ideológicos "antipolíticos" del anarquismo, renunciando de antemano a la toma del poder por los trabajadores, a la par que idealizaban la huelga como el instrumento que, por sí mismo, conduciría al cambio de régimen. En lugar de ver las luchas económicas de los trabajadores como una vía para elevar el grado de organización y conciencia revolucionaria y engarzarlo con la lucha por el poder político y el establecimiento de una genuina democracia obrera, las concebían como un estorbo para la lucha general contra el sistema, o por el contrario, como el único objetivo del movimiento, limitando así su acción y perspectiva de lucha.

La represión contra el movimiento cenetista

Tras la victoria de la huelga de La Canadiense, la clase dominante pasó al contraataque. La burguesía organizó un paro patronal de noviembre de 1919 a enero de 1920, despidió a los líderes sindicales y con las listas negras les impidió volver a trabajar. La CNT respondió a estas provocaciones con nuevos llamamientos a la huelga, a lo que la burguesía respondía con más represión policial y militar, encarcelando a miles de obreros cenetistas (solo en 1921 se cuentan en tres mil los detenidos de la CNT) reduciendo así los efectivos de la vanguardia proletaria.

Los llamados Sindicatos Libres, formados de esquirols y matones, y el Somatén, pistoleros armados y financiados por la burguesía y por el aparato del Estado, asesinaban impunemente a los dirigentes obreros. La burguesía catalana mostraba nuevamente donde se encuentran sus verdaderos intereses: en la defensa de la propiedad. Los mismos que poco tiempo atrás entonaban cantos de sirena sobre la Asamblea de Parlamentarios y lideraban el movimiento autonomista catalán, ahora organizaban el Somatén para asesinar a sindicalistas, entre los cuales se encontraría Salvador Seguí, asesinado en 1923.

La alianza de gobierno y patronal, policía, ejército y somatenes resultó una fuerza muy poderosa. Las huelgas seguían sucediéndose, pero la mayoría acababan en derrota y más represión. Esta dinámica se cierra en septiembre de 1923 con el golpe de Estado de Primo de Rivera, organizado con la complicidad del rey y de la burguesía. Se cierra así un capítulo de la lucha proletaria lleno de lecciones, que bien puede ser entendido como un ensayo general de la revolución y la contrarrevolución que tuvo lugar durante la II República.

* Las Juntas Militares eran agrupaciones de oficiales formadas en 1916 al calor del descontento con la política de ascensos dentro del Ejército, la supuesta falta de recursos para la guerra en Marruecos y, sobre todo, contra lo que la oficialidad consideraba como falta de mano dura contra los estallidos obreros. Este intento de los dirigentes reformistas de ganar a la oficialidad del ejército, en lugar de hacer propaganda revolucionaria entre los soldados rasos para recabar su apoyo o al menos su neutralidad con la lucha obrera, y así romper el ejército en líneas de clase, fracasó estrepitosamente debido a los profundos lazos del alto mando militar con el Rey y la oligarquía.



Los clásicos del marxismo

Reforma o revolución,

de Rosa Luxemburgo

Escrito en el año 1900, el libro de Rosa Luxemburgo posee gran importancia para la clase trabajadora y la juventud en la época actual. Fue el primer intento de combatir desde el punto de vista del marxismo a las corrientes oportunistas en el seno de la socialdemocracia alemana, encabezada por Eduard Bernstein uno de los

dirigentes de este partido (SPD). Bernstein en varios textos dio voz a las tendencias que reflejaban la presión ideológica y material de la burguesía a través de los elementos pequeño burgueses dentro de la socialdemocracia alemana. Al mismo tiempo que se reivindicaba marxista, revisaba el marxismo convirtiéndolo, tal

como señala Rosa Luxemburgo “en una expresión del radicalismo burgués”. Buena parte de los argumentos políticos de socialdemócratas y centristas que encontramos en la actualidad se hallan ya expuestos por Bernstein en sus libros, y son contestados por Rosa Luxemburgo en su obra *Reforma o Revolución*.

Carlos Rodríguez

El revisionismo de Bernstein reflejaba la presión del auge económico que desde 1873 se dio en Europa, creando una base social para el reformismo (en un principio minoritaria) dentro de la socialdemocracia alemana. Una capa del proletariado fruto de los beneficios del saqueo imperialista consiguió elevar sus condiciones de vida por encima del resto de la clase y reflejó con viveza la presión de clases ajenas. Para Rosa Luxemburgo “el revisionismo de Bernstein no es ‘inocuo’ pues cuando se trata de llevar su teoría idealista al terreno de la práctica supone la adaptación de la socialdemocracia a la burguesía, la conciliación de clases y con ello a la desmoralización de la clase obrera”, tal y como demostró toda la experiencia posterior.

‘El objetivo final, sea cual fuere, es nada; el movimiento es todo’

Para el marxismo no existe una contraposición entre la lucha por las reformas y la lucha por la revolución; de modo sucinto, la lucha por las reformas es el medio a través del cual la clase obrera sobre la base de la experiencia llega a la conclusión de la imposibilidad, de las limitaciones o temporalidad de las mismas bajo el capitalismo y con ello a la necesidad de llevar a cabo la revolución socialista. Hoy en día es más evidente que nunca: la crisis capitalista aboca a la burguesía a terminar con las reformas que fruto de la presión del movimiento de masas se vio obligada a aceptar en el pasado. Fruto de la experiencia de millones de trabajadores y sus familias se va abriendo camino la idea de que es imposible reformar el sistema y que es necesario acometer una transformación profunda de la sociedad, una revolución.

En 1900 la burguesía alemana también estaba llevando una política de contrarreformas y ataques a la clase trabajadora, como señala Rosa Luxemburgo en su libro. Y contradictoriamente a la situación en que se encuentra la clase obrera alemana, la teoría de Eduard Bernstein, expuesta en sus artículos “Problemas del socialismo” (*Neue Zeit* 1897-1898) y en su libro *Las premisas para el socialismo y las tareas de la Socialdemo-*



Rosa Luxemburgo, en el centro de la imagen, en 1904

cracia, apuesta por la negación de la necesidad de la revolución socialista. El capitalismo puede ser reformado en beneficio de la clase obrera por lo que la revolución se hace innecesaria. Como señala Rosa Luxemburgo: “Su teoría tiende a aconsejarnos que renunciemos a la transformación social, objetivo final de la socialdemocracia, y hagamos de la reforma social, el medio de la lucha de clases, su fin último. El propio Bernstein lo señalaba claramente y en su estilo habitual: ‘El objetivo final, sea cual fuere, es nada; el movimiento es todo’”.

Contra la ‘teoría de la adaptación’ del capitalismo

Bernstein para demostrar que el capitalismo se puede estabilizar y que el desarrollo del mismo no aboca a la clase obrera a la revolución, parte de la idea de que la decadencia general del capitalismo aparece como cada vez más improbable porque, por un lado, el capitalismo demuestra mayor capacidad de adaptación y, por el otro, la producción capitalista se vuelve cada vez más variada. La capacidad de adaptación del capitalismo, según él, se manifiesta en la desaparición de las crisis generales, resultado del desarrollo del sistema de crédito, las organizaciones patronales (cárteles y trust), mejores medios de comunicación y servicios informativos. Se manifiesta, secundariamente, en la persistencia de las clases medias, que surge de la diferenciación de las ramas de producción y la elevación de sectores enormes del proletariado al nivel de la clase media. Lo prueba además, según Bernstein, el mejoramiento de la situación política y económica del proletariado como resultado de su movilización sindical.

Rosa Luxemburgo afirma precisamente lo contrario. “El crédito posee diversas aplicaciones en el capitalismo. Sus dos funciones más importantes son extender la producción y facilitar el intercambio. Vemos que el crédito en lugar de servir de instrumento para suprimir o paliar las crisis es, por el contrario, una herramienta singularmente potente para la formación de crisis. No puede ser de otra manera. El crédito elimina lo que quedaba de rigidez en las relaciones capitalistas. Introduce en todas par-

tes la mayor elasticidad posible. Vuelve a todas las fuerzas capitalistas extensibles, relativas, y sensibles entre ellas al máximo. Esto facilita y agrava las crisis, que no son sino choques periódicos entre las fuerzas contradictorias de la economía capitalista”.

Del mismo modo, cuando Rosa Luxemburgo evalúa los cárteles y trusts desde el punto de vista de sus últimas consecuencias sobre la economía capitalista, señala que son un fracaso como “medios de adaptación”, siendo realmente elementos que conducen a una mayor anarquía en el funcionamiento del capitalismo, estimulando el desarrollo de las contradicciones internas y acelerando la llegada de la decadencia general del capitalismo. Estas expresiones monopolísticas del capitalismo no suprimen la competencia, sino que la exacerban en extremo, al mismo tiempo que rebelan el carácter parasitario de la burguesía que ya ha dejado de jugar un papel progresista en el desarrollo de las fuerzas productivas.

La lucha por el socialismo y los sindicatos

Rosa Luxemburgo afirma en su libro que: “La mayor conquista del movimiento proletario ha sido el descubrimiento de una fundamentación para la realización del socialismo en las condiciones económicas de la sociedad capitalista. El resultado de este descubrimiento fue que el socialismo se transformó, de sueño ‘ideal’ milenarista de la humanidad, en necesidad histórica”.

Bernstein por el contrario niega la existencia de condiciones económicas para la consecución del socialismo y pone como ejemplo el incremento del número de accionistas en las empresas, negando la idea planteada por Marx de la tendencia a la concentración del capital y teorizando que el desarrollo de las sociedades por acciones va en contra de esa tendencia, idea que Rosa desmonta. Esa teoría falsa aparecerá repetidas veces a lo largo de la historia bajo el nombre de “capitalismo popular”.

Al mismo tiempo, según Bernstein, los sindicatos y las cooperativas enriquecerán a los trabajadores y terminarán con la ganancia individual capitalista. Rosa Luxemburgo contesta afirmando que los obreros

cuando forman una cooperativa de producción se ven abocados a gobernarse con el máximo absolutismo fruto de la competencia capitalista. Se ven obligados a asumir ellos mismos el rol del empresario capitalista, esta contradicción es la responsable del fracaso de las cooperativas de producción, que se convierten en empresas puramente capitalistas o, si siguen predominando los intereses obreros, terminan por disolverse.

Respecto a la lucha sindical, aunque es un aspecto esencial en el proceso de toma de conciencia de la clase obrera y a través del que pueden obtenerse mejoras en las condiciones de vida de la clase obrera, arrebatando a los capitalistas parte de la ganancia en favor de los salarios, tiene sus límites. Los sindicatos intervienen en la distribución de la riqueza generada pero esta distribución está fundamentalmente determinada por el modo de producción capitalista (basado en la propiedad privada de los medios de producción), sobre el que los sindicatos no intervienen. La necesaria lucha sindical nunca puede sustituir la lucha política de la clase obrera por la toma del poder. En la situación actual vemos que ante la crisis generalizada y el cierre de empresas, recortes salariales y despidos masivos, la política sindical reformista hace aguas por todos lados y está en profunda crisis.

En aquella época los reformistas no se atrevían a declarar abiertamente que el socialismo es imposible de conseguir, así que Bernstein basándose en su “teoría de la adaptación” ve en la expansión gradual de los sindicatos, la reforma social y la democratización política del Estado los medios para la realización progresiva del socialismo en un futuro indeterminado.

Sin embargo, el capitalismo no es un proceso gradual de mejoras sociales y de consolidación de los derechos democráticos conquistados. De la misma manera que ahora la burguesía quiere imponer un retroceso histórico en todos los avances sociales de las últimas décadas, también están tomando toda una serie de medidas de carácter abiertamente antidemocrático. La opción de llegar al socialismo “poco a poco”, haciéndolo cada vez más democrático y más justo, sin que la burguesía se dé cuenta, es una utopía completamente reaccionaria. Estas ideas reformistas llevaron, en la práctica, a la total decadencia de la II Internacional y a su completo posicionamiento con los intereses de la burguesía, incluyendo el apoyo a las manifestaciones más destructivas del sistema capitalista como las guerras imperialistas o las acciones represivas contra el propio movimiento obrero, que llevaron al aplastamiento de la revolución en Alemania y al asesinato, entre otros, de Rosa Luxemburgo.

Como diría Rosa Luxemburgo “la reforma y la revolución no son, por tanto, distintos métodos de progreso histórico que puedan elegirse libremente en el mostrador de la historia, como cuando se eligen salchichas calientes o frías, sino que son momentos distintos en el desarrollo de la sociedad de clases, que se condicionan y complementan entre sí y al mismo tiempo se excluyen mutuamente, como el polo norte y el polo sur, o la burguesía y el proletariado”.



El cierre de RTVV desata la indignación contra la Generalitat del PP

¡Por una huelga general para echar a Fabra y su Gobierno!

Ulises Benito

Las doce de la noche del jueves 28 de noviembre Fabra pretendía acallar la radiotelevisión valenciana. Sin embargo, hasta doce horas después no pudo. Los trabajadores tomaron el Centro de Programas de la televisión, realizando un impresionante programa especial de denuncia. Finalmente Alberto Fabra ha enmudecido una voz (molesta desde que el 5 de noviembre los trabajadores tomaron el control de la programación), pero no podrá callar la voz de la mayoría de la sociedad, que se rebela contra la dictadura de la camarilla del PP y del gran capital que está detrás de ella. Esa voz retumbó con fuerza el sábado 30 (como ya ocurriera el día 9): 80.000 personas manifestándose al grito de “açò és un colp d’Estat” (“esto es un golpe de Estado”) en Valencia y Alicante exigieron una RTVV pública y de calidad y elecciones anticipadas para echar al PP.

Los trabajadores resisten doce horas la desconexión

Por si no fuera suficientemente grave el hecho de cerrar RTVV (dejando a 1.700 trabajadores en la calle, afectando indirectamente a otros 10.000 y agravando la falta de futuro de los trabajadores audiovisuales valencianos, el 85% de ellos actualmente en paro), las formas para hacerlo han sido las típicas de cualquier dictadura, al fin y al cabo no olvidemos que el PP hunde sus raíces en las mejores tradiciones del franquismo. Los trabajadores que intentaban cumplir con su labor fueron bloqueados en la puerta de las emisoras, sin ni siquiera haber recibido ninguna notificación, hasta que a horas intempestivas de la madrugada, recibieron por el móvil un “permiso retribuido”, o sea, vacaciones forzosas. Así defiendo el PP y su policía ese “derecho al trabajo” tan cacareado en los días de huelga... Trabajadores e invitados al programa especial, tuvieron que entrar por ventanas, o puertas traseras. Los trabajadores impidieron hasta el final el acceso de policías y técnicos enviados por la Generalitat al Centro de Control para evitar la desconexión. Sin embargo, después de doce horas de resistencia de la plantilla y de conexión en directo, el Comité llamó a la calma y acató la decisión judicial de desenchufe.

La lucha en RTVV ha sido una demostración constante de la garra de los trabajadores y de su disposición a hacer frente a los obstáculos superando en muchas ocasiones a sus propios representantes sindica-



les. Han sido los trabajadores los que tomaron la iniciativa de exigir la dimisión de Fabra; las manifestaciones del 30 no fueron convocadas por el comité, sino surgidas en las redes sociales y amplificadas desde el programa especial; han sido los trabajadores los que impulsaron el control de la programación y también los que impidieron varias tentativas de cortar la señal. De hecho, pese a la orden judicial de desalojo, los trabajadores muy posiblemente hubieran resistido, incluso continuando con la emisión, como hicieron durante medio año los de ERT, la televisión pública griega (estos animaron en antena a hacer lo mismo). Pero para ello el Comité debía demostrar más decisión, y no asumir la orden. ¿Realmente el Govern de Fabra podría permitirse un solo día con un solo miembro del Comité en prisión?

Los programas informativos y debates de RTVV desde la toma de control por parte de los trabajadores han reflejado las enormes posibilidades de una radiotelevisión valenciana pública, de calidad, plural, en valenciano..., siempre que aquellos mantengan ese control. Como declaró el *exhombre del tiempo*: “se está demostrando que no necesitamos jefes”. Este mes la voz de esos trabajadores, de tantos y tantos colectivos en lucha, de los sindicatos y organizaciones de izquierda (anteriormente vetados en la televisión pública), se ha escuchado con fuerza. Símbolo de ello fue la presencia en el plató, cuatro horas antes del cierre, de Beatriz Garrote, presidenta de la Asociación de Víctimas del Accidente de Metro. Una voz, la de los 43 fallecidos y de los heridos y sus familiares, que nunca jamás tuvo acceso a ningún micrófono de RTVV. Durante el programa especial los trabajadores expresaron diferentes ideas que miden bien el extraordinario proceso de toma de

conciencia que se está produciendo. Que esto es un golpe de Estado, que estamos ante una dictadura pura y dura, que quieren que volvamos al franquismo, que Fabra debe dimitir, que este cierre es sólo parte del ataque general que se está produciendo, que el PP es responsable del despilfarro (se está investigando judicialmente cuánto dinero de RTVV se ha llevado la trama Gürtel), que los pueblos catalán y valenciano somos “hermanos de lengua”... Se repetían los llamamientos a la movilización general, a no votar más al PP.

Por la reapertura de RTVV

Este mes, mientras los trabajadores controlaban la programación y en especial los informativos, el Comité intentaba por todos los medios negociar con el Consell. Incluso ofrecieron una alternativa al cierre que implicaba una importante reducción salarial, y el despido mediante prejubilaciones, bajas incentivadas... de 600 trabajadores, para no superar el presupuesto que ya estaba programado para este año y 2014 (es decir, para que el reingreso por sentencia judicial de 1.100 empleados no supusiera ninguna carga adicional). Pero Fabra avisó de que la decisión era innegociable. El ahorro de 76 millones de euros anuales no es la razón de fondo del cierre. Esta cantidad es una minucia comparada, por ejemplo, con el pago de la deuda pública del Govern (este año, 4.200 millones), con la deuda del propio RTVV (1.300 millones) o, simplemente, con el reciente *donativo* de la radiotelevisión, de 500 millones, a los clubs de fútbol valencianos (empresas privadas en crisis). No, la razón de fondo es que les ha salido mal la prevista privatización de RTVV; su ERE chapuza ha sido anulado por los tribu-

nales, y ellos no podían aceptar la readmisión de los despedidos, porque para el PP hubiera sido una muestra de debilidad... Y este Govern, como al Gobierno de Rajoy, está cada vez más aislado.

Esto lleva a una conclusión: la defensa de todos los puestos de trabajo y la reapertura de RTVV estaba y está totalmente ligado al objetivo de tumbar al gobierno del PP en Valencia. La propia movilización de solidaridad con los trabajadores de RTVV ha tenido como consigna fundamental la dimisión del gobierno de Fabra, lo cual es un punto de partida muy favorable para dar continuidad a la lucha, dándole más contundencia y amplitud. Una enorme marea de indignación recorre el País Valenciano. Fabra no puede acudir a ningún sitio sin que se exprese a su paso toda la rabia; incluso los niños de un colegio de Xàtiva le gritaron a la cara Volem Canal Nou (Queremos Canal Nou) y Fabra dimisió. Desde el cierre de RTVV los trabajadores le han demostrado que no cejarán en su lucha, para ello han decidido seguirle a todos sus actos públicos y exigir su dimisión. El jueves 5 medio millar se concentró delante del Palau de la Generalitat. Hay fuerza para que esta marea se convierta en un tsunami y desalojar a Fabra y a su Gobierno. Para ello es necesario, además de la inmensa fuerza de la clase obrera, una dirección a la altura. ¿Cómo es posible que en esta situación los máximos dirigentes sindicales de CCOO y UGT del País Valenciano estén desaparecidos? Lo único que han dicho es que Fabra ha acabado con el diálogo social (no sabíamos que existía eso...). ¡Es urgente que pongan fecha ya a una huelga general en todo el territorio! Ante su inacción, el comité de RTVV debe tomar la iniciativa. Su llamamiento a un “levantamiento del pueblo valenciano” es positivo, pero la única forma de darle cuerpo es con una huelga general para echar a Fabra. Un llamamiento así de claro del comité a las direcciones de CCOO, UGT e Intersindical tendría un efecto tremendo. ¡Por la reapertura de Canal Nou —y bajo control de los trabajadores—, para defender la educación, la sanidad y todos los servicios públicos y acabar con la sangría del paro, hay que *desconectar* a Fabra y *fundir en negro* al PP! Y la clase obrera puede dar el último puntapié a estos personajes de pesadilla.

En www.elmilitante.net puedes leer la entrevista, realizada unas horas antes del cierre de RTVV, a Vicent Melo, miembro del comité de empresa por CGT.

Panrico: continúa la huelga indefinida en Santa Perpètua de Mogoda

Lluís Perarnau

Por dos veces salió rechazado en referéndum el plan de la empresa, preacordado con UGT, que contempla 745 despidos y un recorte del 18% de los salarios para los “supervivientes”. La plantilla de Santa Perpètua de la Mogoda (Barcelona), cuando llevaban ya siete semanas en huelga indefinida, respondió de manera firme al chantaje del fondo propietario de Panrico. Con los votos de esta planta, el resultado de las consultas a los trabajadores fue claro y diáfano: NO al plan de

destrucción de empleo presentado por la dirección.

Aún así, amparándose en la legislación actual, los directivos de Panrico consideran que tienen suficiente con el aval de la mayoría de la mesa negociadora para presentar el ERE. Nueve de los trece representantes en la mesa dieron su visto bueno al acuerdo. CCOO anunció que lo impugnará a la Audiencia Nacional. Además, el pasado 28 de noviembre, los trabajadores de Santa Perpètua ratificaron en asamblea la continuación de la huelga indefinida, con lo que la lucha por el empleo y contra

el chantaje patronal entra en una nueva fase, mucho más dura, donde las trabajadoras y los trabajadores de Panrico demuestran estar dispuestos a ir hasta el final.

CCOO tienen que impulsar ya una gran manifestación de solidaridad

La campaña de solidaridad se ha ido extendiendo por toda la comarca del Vallès Occidental y fuera de ésta. La caja de resistencia ha recogido donativos de colectas en muchas otras empresas y colectivos, aporta-

ciones individuales, etc., y la opinión pública es completamente favorable a los trabajadores. Pero es necesario y de manera urgente romper el aislamiento en que se encuentra la huelga de Panrico. CCOO tiene que apoyar al comité y a los trabajadores de Panrico trazando un plan de lucha donde confluyan las otras empresas en conflicto: Alupu y Johnson Control en Sabadell, Delphi en Sant Cugat, Alstom en Santa Perpètua... Se echa en falta, y de manera muy acuciante, que las direcciones de CCOO del Vallès y de Catalunya convoquen una gran movilización en la comarca o en Barcelona en apoyo a la huelga. Los trabajadores de Panrico ya están demostrando, cada día, su determinación en la lucha. Ahora falta que los dirigentes de CCOO demuestren estar a la altura del reto que representa esta lucha por el empleo y contra el chantaje patronal.

Huelga de jardinería y limpieza viaria en Madrid

Una lucha ejemplar y una gran victoria

Después de trece días de huelga indefinida, luchando contra la campaña de criminalización desatada desde el ayuntamiento de Madrid y amplificada por todos los medios de comunicación de la derecha, enfrentándose a cuatro poderosos monopolios económicos que se benefician desde hace décadas de la privatización de los servicios públicos para llenarse los bolsillos, frente a viento y marea..., los trabajadores de limpieza viaria y jardinería de Madrid han obtenido una gran victoria. Lo que parecía imposible se ha conseguido: ningún despido, de los 1.134 que la patronal

Entrevista a José Rodríguez Ruano, delegado sindical de jardinería por CGT en Valoriza, sector 3

puso encima de la mesa, y ninguna reducción salarial en las tablas, frente a la propuesta de los empresarios de una rebaja del 40%. Una lucha ejemplar de nuestra clase, que ha puesto de manifiesto toda la dignidad, fuerza y solidaridad que los trabajadores, en este caso los más oprimidos de entre los oprimidos, pueden

generar cuando se plantea una batalla decidida y dispuesta a llegar hasta el final.

Para conocer más de cerca los detalles de cómo transcurrió esta movilización y extraer todas las lecciones entrevistamos a José Rodríguez Ruano, delegado sindical de jardinería por CGT en Valoriza, sector 3.

EL MILITANTE.— ¿Qué valoración haces del resultado de la huelga que habéis llevado a cabo?

José Rodríguez Ruano.— Como sabéis hemos conseguido echar atrás los planes de las empresas. Por cierto, estos planes, no me cabe la menor duda, estaban discutidos y acordados con los responsables del ayuntamiento de Madrid y a lo que hemos asistido durante el conflicto es al reparto de papeles entre ellos, echando cada uno balones fuera, eludiendo su responsabilidad con el propósito de que el tiempo pasara y se doblgara la resistencia de los trabajadores. No lo han conseguido, sus planes han sido desbaratados por la acción contundente de los trabajadores y por el apoyo social que hemos recibido del resto de los trabajadores y de toda la población en general.

Pero desde mi punto de vista este gran logro no ha sido lo único que hemos conseguido con esta lucha. El más importante ha sido la constatación de que ¡SÍ SE PUEDE! Esta consigna ha adquirido todo su sentido en estos trece días de huelga. ¿Los ataques se pueden frenar? Sí, con la condición de que se responda con la lucha. Y claro, que esta tenga como objetivo evitar todos los despidos y la reducción salarial. En demasiadas ocasiones se plantea por parte de las direcciones sindicales como punto de partida luchar por “conseguir” que en vez de 1.200 despidos sean 900 y que en lugar de una reducción salarial del 40%, “conseguir” que esta quede en el 25%. De esta forma la dirección de la lucha, los que deberían organizar la movilización y ayudar con argumentos y con su ejemplo a que los trabajadores fortalezcan la confianza en sus propias fuerzas, lo que hacen, lo pretendan o no, es echar jarros de agua fría y cultivar el fatalismo que la patronal y el gobierno nos quieren imponer. Por supuesto, otro aspecto importante es que esta respuesta de los trabajadores debe ser igual o más contundente que el ataque que nos obliga a luchar.

Con esta huelga hemos demostrado que este es el camino. Desde un primer momento hemos planteado no a los despidos, no a la reducción salarial y esto ha transmitido a la plantilla la confianza necesaria para protagonizar esta magnífica lucha.

EM.— Después de esta experiencia, ¿qué piensas del argumento tantas veces esgrimido por las cúpulas sindicales de UGT y CCOO, de que “no hay ambiente” para emprender una lucha contundente para echar atrás todos los ataques del gobierno del PP?

JRR.— Yo soy delegado sindical y militante de CGT, y lo primero que tengo que decir sobre esto es que desde la dirección de mi sindicato también se recurre a ese argumento, que sinceramente considero que no tiene nada que ver con la realidad. Los trabajadores de jardinería y limpieza viaria hemos participado como un solo hombre en la huelga; el esquirolaje ha sido anecdótico y hemos demostrado que estamos dispuestos a hacer los esfuerzos que sean necesarios para luchar por nuestros derechos. No creo que seamos una excepción respecto al



Manifestación el 4 noviembre, que dio inicio a la huelga indefinida, y asamblea en un centro de Vallecas

resto de los trabajadores. Lo que sí es cierto es que en este conflicto ha existido un factor que ha contribuido a que esto se manifieste de manera clara: como antes explicaba, los compañeros que dirigen los sindicatos de limpieza viaria y jardinería han captado el ambiente de descontento en las plantillas y han transmitido su disposición a luchar en serio y por reivindicaciones por las que merecía la pena hacer sacrificios. Los trabajadores sí queremos luchar, lo que estamos es hartos de participar en acciones que en la práctica solo tienen un carácter simbólico, que los sindicatos organizan para pasar el trámite y que todos sabemos de antemano que no van a servir para nada.

A mi, particularmente, esta huelga me ha ayudado mucho a comprender la realidad del ambiente entre los trabajadores. El trabajo sindical cotidiano es muy duro, sobre

todo en estos momentos de ofensiva rabiosa por parte de los empresarios y el gobierno contra los derechos de los trabajadores y cuando hay seis millones de parados. En el día a día los trabajadores intentamos resistir esta presión trabajando y en muchos casos tratando de pasar desapercibidos. Pero esta realidad debemos evitar que se convierta, para los sindicalistas, en el “árbol que no nos deja ver el bosque”. Esa es otra gran lección de esta huelga. Esa aparente “apatía” en el día a día, en la inmensa mayoría de los casos se debe a que los trabajadores saben o intuyen claramente que el ataque contra sus derechos es general, que traspasa las fronteras de su empresa y que solo se podrá parar de forma colectiva y contundente.

Cuando hay una propuesta de lucha firme, clara, con objetivos por los que merece la pena luchar, los trabajadores estamos dis-

“Cuando hay una propuesta de lucha firme, con objetivos por los que merece la pena luchar, los trabajadores estamos dispuestos a llegar muy lejos. Nosotros no somos una excepción”

puestos a llegar muy lejos. En este sentido nosotros no hemos sido una excepción sino que, como también demuestran los trabajadores de la educación, la sanidad, los de las lavanderías de los hospitales y los del alumbrado de Madrid, que van a ponerse también en huelga indefinida, somos la regla.

EM.— ¿Alguna cuestión más que quisieras destacar?

JRR.— Sí. Para los muchos sindicalistas, muchos de ellos de CCOO y UGT, que estamos luchando por un modelo sindical distinto al que están imponiendo las cúpulas de los sindicatos mayoritarios, y que consideramos, por ejemplo, que las luchas deben tender a unificarse, esta huelga nos ha reafirmado en que tenemos razón y en que la mayoría de los trabajadores coinciden con nosotros.

Si desde las uniones regionales de CCOO y UGT, que son los sindicatos con mayor implantación y por lo tanto los que tienen mayor responsabilidad, se realizara la actividad sindical con el mismo criterio con el que se ha llevado a cabo nuestra lucha, considero que la victoria que hemos alcanzado podría haber sido total e incluso podría haber provocado la caída del ayuntamiento del PP. La huelga llegó a un punto en que, para que esta subiera el nivel necesario para doblegar definitivamente a las empresas y al ayuntamiento, habría que enmarcarla en la lucha general contra el PP de Madrid. Había que incorporar a la lucha a todos los trabajadores públicos o que realizan servicios públicos gestionados por empresas privadas; haber puesto en lugar destacado como objetivo a conseguir, además de la defensa del empleo y los salarios, la remunicipalización de los servicios públicos y haber puesto encima de la mesa la convocatoria de una huelga general en Madrid, como mínimo de todos estos trabajadores.

El acuerdo firmado, y este es uno de sus mayores logros, ha supuesto un gran impulso, un gran paso adelante para que los miles de sindicalistas que compartimos estos criterios consigamos imponer el modelo sindical que hoy necesitamos los trabajadores; un sindicalismo combativo, democrático, de clase, revolucionario y anticapitalista.

En www.elmilitante.net: Los trabajadores de limpieza y jardinería de Madrid alcanzan una gran victoria. Un ejemplo para la clase obrera y una llamada para un giro radical en la política de los sindicatos.

¡Absolución de Cañamero, Gordillo y los militantes del SAT!

¡Basta ya de reprimir y acosar a los que luchan!

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha condenado a Diego Cañamero, Juan Manuel Sánchez Gordillo y a dos militantes más del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) a 7 meses de cárcel y una multa de 1.200 euros por la ocupación de la finca Las Turquillas. La finca es propiedad de Patrimonio del Estado, fue cedida en 2010 al Ministerio de Defensa y

se encuentra totalmente infrautilizada, destinada sólo a alojar unos cien caballos y una veintena de burros. El SAT ocupó la finca para denunciar esta situación y exigir el uso social de la tierra para mitigar el paro que existe en la comarca.

Artículo completo en www.elmilitante.net

Sección sindical de CCOO en Europastry Oficinas

El 2 de diciembre se celebró en Terrassa (Barcelona) el juicio por la readmisión de Ivonne García, que fue despedida el pasado 27 de junio por represión sindical. Ivonne llevaba varios meses desarrollando una intensa actividad sindical. Destacó en su empresa en la lucha por la defensa del convenio colectivo de masas congeladas, que Europastry se niega a negociar con el fin de que desaparezca. Intervino en varias asambleas, participando activamente tanto en la huelga general estatal del 14 de noviembre de 2012 como en la huelga del 23 de mayo de 2013 en Catalunya en defensa del convenio, en la que estuvo en los piquetes. También ha promovido la formación de la sección sindical de CCOO. Precisamente, uno de los objetivos que Europastry buscaba al despedir a Ivonne era provocar el miedo en la plantilla y cortar su incipiente organización. No se trataba de un despido disciplinario por un supuesto error muy grave de la compañera, sino un claro caso de represión sindical, expulsando a una trabajadora que se estaba significando dentro de la plantilla y que encarnaba un sindicalismo de lucha y combate muy alejado del gusto de Europastry.

El juicio iba a celebrarse el 25 de octubre, pero tuvo que ser aplazado debido a la huelga indefinida de los funcionarios de justicia que se convocó dos días antes. El 2 de diciembre, como en la anterior ocasión, se celebró una concentración en la puerta de los juzgados de Terrassa que ha sido todo un éxito. Participaron una treintena de compañeros para apoyarla, entre los que se encontraban delegados de CCOO de Gedesco-Maheso, de CGT de SERMUNEGISA (Girona), entre otros delegados de distintas empresas, militantes de EUiA, y compañeros de EL MILITANTE y del Sindicato de Estudiantes. Durante la media hora anterior al juicio se cantaron consignas en contra de la represión sindical y en defensa de la readmisión de Ivonne, atrayendo la atención tanto de los jueces como de los funcionarios que trabajaban ese día en los juzgados, así

¡Ivonne somos todos! ¡Ivonne readmisión!

Celebrado el juicio por el despido de la delegada sindical de Europastry Oficinas, despedida por luchar



como de los usuarios. Contamos con la presencia de medios de comunicación y tras un saludo de la compañera, defendiendo la lucha como único camino para parar los ataques que sufrimos los trabajadores, se celebró el juicio con la sala completamente llena de trabajadores y jóvenes que se solidarizaban con ella.

La actitud de la abogada de la empresa fue desde el principio muy violenta. Basó su defensa en la supuesta imposibilidad de cometer un error, debido a que según ella, en Europastry tienen un sistema informático "infalible" que no deja lugar a las equivocaciones, por lo que Ivonne había actuado a mala fe y, por tanto, el despido debía ser disciplinario. Además, mostró un tremen-

do desprecio y un descarado cinismo, al sugerir que Ivonne había organizado una caja de resistencia para enriquecerse, y que no había desarrollado actividad sindical alguna. La abogada llegó a insistir en que si Ivonne era una sindicalista, ella misma tendría que ejercer su defensa, sin necesidad de un abogado. También intentó centrar la defensa desprestigiando la sección sindical constituida en Europastry oficinas días antes del despido de la compañera, argumentando que no se podía constituir debido al supuesto número limitado de afiliados con que cuenta CCOO en la empresa. El culmen de su cinismo quedó patente cuando, con un lenguaje totalmente agresivo que incluso le valió una llamada de atención por

parte del juez, intentó dar la vuelta a la realidad, afirmando que se sentía molesta porque Ivonne utilizaba el tema sindical para, según la abogada, protegerse ante un despido disciplinario, a su parecer totalmente merecido. Según la empresa, el despido se debía a una continua falta de atención de la compañera en su puesto de trabajo —de la que Ivonne en ningún caso había sido apercibida—. Europastry trataba de dar una imagen de empresa modelo, que no aplica represión sindical alguna y que respeta el derecho a huelga, lo cual contrastaba abruptamente con los propios datos que dio la abogada al enumerar el abultado número de trabajadores de Europastry que han secundado huelgas y que han sufrido, posteriormente, distintas modalidades de despidos. Desde luego no se trataba de ninguna coincidencia.

Por parte de la empresa testificó Emilio Becerra, superior y responsable directo de Ivonne en el departamento de facturación, contradiciéndose en varias ocasiones. Especialmente importante fue el hecho de que admitiera que la decisión de despedir a la compañera se tomara un día antes del supuesto error tan grave que ella había cometido. Este hecho se ratificó con el testimonio de una trabajadora que participó en el proceso de selección de un puesto de trabajo que se ajustaba como un guante al puesto de trabajo de Ivonne. Había un proceso de selección de personal en Europastry pidiendo una persona para el departamento de facturación desde el mes de mayo, fecha muy anterior al "grave error" cometido por la compañera. El anuncio, como admitió el propio Becerra, demandaba exactamente las mismas funciones que Ivonne ejercía en su puesto de trabajo. Otra de las contradicciones del testimonio del jefe de Ivonne fue la admisión de que era fácil equivocarse en la facturación, pues es un sistema muy complejo, si no se prestaba totalmente la atención al momento de facturar, con lo que se puso en evidencia la supuesta "perfección del sistema informático, que no daba lugar a errores".

Finalmente, salió a testificar en contra de la compañera la actual delegada por UGT

La crisis provocada por el cierre de Fagor electrodomésticos y Edesa se extiende

Por una alternativa socialista contra la destrucción de empleo!

Eloy Val del Olmo

Fagor Electrodomésticos paralizó el 18 de octubre la producción de las plantas de Bergara y Eskoriatza y presentó un plan de "viabilidad" que, apenas dos semanas después, el 30 de octubre, fue rechazado por el Consejo General del Grupo Mondragón (MCC) que se negó a aportar 50 millones de euros adicionales. De esta manera se promovió definitivamente el cierre de Fagor y Edesa lo que supondrá la destrucción de miles de empleos directos e indirectos. Una auténtica hecatombe para el empleo en Euskadi, y un demoledor fracaso del modelo económico del PNV.

Fagor Electrodomésticos ha presentado también concurso voluntario de acreedores para sus filiales Fagor Ireland y Mastercook y hará otro tanto con sus sociedades filiales Grumal y Proiek. La última en acogerse al precurso de acreedores ha sido Industrias Tajo, ubicada en Oiartzun (Gipuzkoa), donde emplea a 113 personas y que comenzó su proceso de internacionalización en 2006 con fábricas en la República

Checa y Polonia empleando en conjunto a más de 300 trabajadores.

La crisis de MCC y el efecto contagio

A pesar de la negativa de la dirección del Grupo Mondragón en reconocer el efecto contagio, incluso el propio lehendakari Iñigo Urkullu ha advertido que "la crisis de Fagor Electrodomésticos afectará negativamente a centenares de empresas y a miles de trabajadores vinculados con la producción de la cooperativa". La cadena de supermercados Eroski acumula ya una deuda de 2.605 millones que se está renegociando con 22 entidades bancarias y de caer Eroski tendría efectos en la Caja Laboral que actúa como financiera del grupo. El cierre de Fagor y Edesa repercutirá muy negativamente en el conjunto de la economía vasca, cuyo tejido industrial ha sufrido ya un fuerte impacto por la crisis: 7.500 empresas han echado el cierre, cuatro al día de media, entre ellas empresas emblemáticas como Formica, Outokumpu, Corrugados Azpeitia, Arfe, Inasa etc. La cri-

sis del Grupo MCC tendría igualmente impacto en muchas otras zonas del Estado.

No hay información ni transparencia

ELA, sindicato mayoritario en Euskadi, ha denunciado que "Fagor Electrodomésticos gestiona esta situación con total opacidad, tanto en lo que respecta a los socios (información, situación de sus empleo, la suerte de las aportaciones...), como a quienes son trabajadores-as por cuenta ajena y tienen representación sindical".

Ante las masivas protestas, encierros y manifestaciones de los trabajadores de Edesa y de Fagor Electrodomésticos, la dirección de MCC intenta dividir a la plantilla, priorizando la recolocación de los socios (hasta la fecha de escribir este artículo dicen haber recolocado a 225) a costa del despido de eventuales y contratados. Esta política choca con el instinto natural de los trabajadores de Edesa y Fagor que comprenden la necesidad de mantener la más amplia unidad para responder a este ataque. Lo primero que reivindican los trabajadores es

una información clara y veraz de las cuentas y de todo lo que está ocurriendo.

Esto es el sistema capitalista, de funeral en funeral

La crisis de sobreproducción del capitalismo en el sector de línea blanca, con unos mercados saturados de productos donde las nuevas tecnologías permiten que una compañía surcoreana como LG tarde un año en lanzar un nuevo modelo de frigorífico, mientras que las empresas de ámbito europeo necesitan de media tres años, junto a un mercado menguante por la caída del poder adquisitivo de la clase trabajadora y la proletarización de las capas medias, se extiende cada vez a más sectores de la economía poniendo en evidencia la contradicción entre la producción social y la apropiación individual. Como explicaba Marx es la rebelión de las fuerzas productivas contra el modo de producción capitalista.

En un comunicado, LAB señalaba que "el sistema no funciona, el sistema nos lleva de funeral en funeral". La dirección de LAB describe la realidad, pero lamentablemente en lugar de ofrecer una alternativa de clase a los trabajadores, lo que hace es pedir al PNV que la ofrezca, exactamente igual es lo que están haciendo los dirigentes de ELA, UGT y CCOO, cuando el PNV y la burguesía vasca son realmente el problema y no la solución. El capitalismo es

Alejandro Fernández
Delegado de CCOO Correos Asturias

Correos, hacia la privatización

El sector postal español se encuentra totalmente liberalizado desde la aprobación de la Ley Postal 2010, hija aventajada de la III Directiva Postal de la Unión Europea; esas sacrosantas directivas con las que la burguesía europea se está llenando los bolsillos a base de acabar con los sectores públicos. Con su puesta en marcha, la mayor empresa pública del Estado español, Correos, pierde el monopolio que ostentaba sobre una amplísima cantidad de productos postales (notificaciones administrativas, giros, etc.).

Entre otras lindezas, la Ley Postal permite el acceso gratuito de los operadores privados a la red pública (los trabajadores públicos llevamos productos postales de estas empresas); fija unas tarifas para Correos mientras a los privados se les permite depreciarlas sobre la base del *dumping* laboral, y obliga a la empresa pública a ser el único prestador del Servicio Postal Universal (SPU). Esto último significa que está obligada a llegar a todos los buzones del territorio cinco días a la semana y con rigurosos tiempos de entrega que de no ser cumplidos acarrearán sanción de la UE. La obligación por parte de los operadores privados respecto a Correos, por ser este el prestador del SPU, se limita a la aportación de un ridículo 1% de sus beneficios si estos superan los 50.000 euros; fácilmente sorteable cuando se trabaja a base de franquicias y subrogación de empresas.

Por si la Ley Postal no significase suficiente ataque contra el operador público en beneficio de los privados, el Gobierno del PP, al servicio de los empresarios, se encarga de hacer el resto. Por un lado, el Tribunal de Defensa de la Competencia ha convertido a Correos en la empresa más multada tras Telefónica (muy por encima de las eléctricas o las petroleras, con problemas de competencia más evidentes y graves que los de Correos). Por otro lado, desde el Gobierno se está impulsando la sustitución de la factura física (carta) por la electrónica, sustitución que no beneficia en nada a los ciudadanos (internet solo llega a un 60%) sino a los planes de ahorro de los grandes clientes (el correo de 189 de ellos significa el 85% de la facturación de Correos!). Y qué decir de la "neutralidad" que la Administración está teniendo a la hora de volver a adjudicar contratos (los últimos los de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social) a operadores privados como Unipost, que han demostrado reiteradas veces que no tienen capacidad para cumplirlos.

Y mientras esto ocurre los voceros de la derecha, como *El Mundo*, a base de mentiras y al servicio de determinados intereses



empresariales van creando en sus páginas la opinión de que Correos es una rémora para la economía nacional.

Plan estratégico

Estos descarados ataques al operador público en beneficio de los lobbies privados muestran las intenciones del gobierno respecto a la mayor empresa estatal: su privatización.

De la mala situación económica de la empresa (consecuencia de su nefasta gestión), que ha dado pérdidas en 2012 y que espera un raquítico beneficio para 2014, se puede deducir que su venta no se producirá mañana. Antes hay que hacerla atractiva a futuros inversores saneándola con dinero público para después trocearla. De ahí la "sorpresa" inyección estatal de 318 millones de euros este año y de 518 millones más para 2014 en concepto de deuda acumulada por la prestación del SPU.

Y con ese mismo objetivo nace el Plan Estratégico presentado recientemente por la dirección de la empresa a bombo y platillo: llevar a cabo una total reconversión de Correos a la vez que se intenta conseguir cuota de mercado en la paquetería (segmento del mercado postal con más futuro y donde Correos ostenta una ridícula cuota del 4%).

Desde la puesta en marcha de este plan de "viabilidad" se ha podido apreciar un notable incremento de la destrucción de puestos de trabajo con la consiguiente pérdida de calidad en el servicio; se han sacado a subasta con una consultora externa 112 inmuebles (extraña actitud la de vender patrimonio cuando se nos dice que vamos a crecer) y se ha iniciado un proceso de cierre de oficinas y de centros de tratamiento automatizado del correo. Ni más ni menos que el mismo camino que ha recorrido el Royal Mail británico y que ha finalizado

hace unos meses con su salida a Bolsa tras el despido de miles de trabajadores y el cierre de miles de oficinas.

Degradación del servicio y de las condiciones laborales

Sus consecuencias tanto para trabajadores como para usuarios serían terribles. No tenemos que ir muy lejos para comprobarlo. Unipost, la otra gran empresa postal (privada) dedicada al correo tradicional (no a la paquetería), amenaza actualmente a su plantilla con un cuarto ERE en un tiempo récord en su corta existencia. La última propuesta de la empresa consiste en 500 despidos (sobre una plantilla de 2.600 trabajadores y 2.000 subrogados), rebaja salarial del 10%, movilidad forzosa sin indemnización, conversión sin límite de jornadas completas a parciales con reducción salarial y cargarse el actual convenio de empresa pasando al de Entrega Domiciliaria, hecho que supondría un recorte de hasta un 30% del salario.

La pérdida continua de contratos por parte de Unipost al incumplir los plazos de entrega habla por sí solo del tipo de servicio que se ofrece cuando lo único que se persigue es el beneficio económico.

Estas mismas serían las consecuencias inmediatas de la privatización de Correos: la sobreexplotación de sus trabajadores con pérdidas salariales y de derechos y la drástica caída en la calidad del servicio. El impacto que sufrirían las zonas rurales, deficitarias por naturaleza desde un punto de vista empresarial, sería un auténtico desastre.

Y es que no son nuevas las "bondades" de la liberalización de sectores estratégicos de la economía y la privatización de las grandes empresas públicas. Ejemplos hartos elocuentes los encontramos en el sector eléctrico y en el de las telecomunicaciones. To-

dos los beneficios prometidos a los ciudadanos se han quedado, tras su venta a precio de saldo al gran capital, en un empeoramiento del servicio y un escandaloso aumento de los precios; basta ver las facturas del teléfono, la luz o el agua, que se llevan buena parte de nuestros salarios. Quienes se benefician realmente son las empresas compradoras y los políticos que impulsan estos procesos y que acaban en sus consejos de dirección con salarios astronómicos en pago a los servicios prestados.

Enorme potencial de lucha de la mayor plantilla estatal

Los trabajadores a través de la lucha organizada debemos de echar atrás las liberalizaciones de los sectores estratégicos, para así poder disfrutar de servicios públicos baratos, de calidad y con condiciones dignas de trabajo. En el sector postal mantener a Correos como una empresa pública no es suficiente para ello. El Correo francés (*La Poste*) lo es y además ha recibido fuertes inversiones estatales que han logrado ganar cuota de mercado en el terreno de la paquetería a un ritmo acelerado; pero, a la vez, ostentaba hace dos años un número de suicidios entre sus trabajadores superior a la tristemente famosa France Telecom. Esta situación es producto del incremento de los ritmos de trabajo y del ataque a las condiciones laborales que el operador público se ve "obligado" a realizar para competir con el resto de operadores privados que tiran los precios en base a la precariedad de sus trabajadores: subrogados con convenios lamentables, autónomos que trabajan de sol a sol, etc.

Por eso el monopolio estatal se convierte en necesario para conseguir un buen servicio, barato y realizado dignamente. Además, sólo con el control obrero por abajo se podrá atajar la corrupción, los privilegios y la mala gestión burocrática.

Los trabajadores de Correos debemos recuperar el terreno perdido y hacer frente a los ataques que ya estamos sufriendo y que se irán incrementando más pronto que tarde. No podemos consentir que con la excusa de hacernos más competitivos pisoteen nuestros derechos y salarios. La empresa no se vende, se defiende. El potencial de lucha de la mayor plantilla estatal (54.000 trabajadores según la SEPI, actual propietario), con implantación en todo el territorio es absolutamente demoledor; y lo podemos multiplicar exponencialmente si nos unimos al resto de empleados públicos, porque la lucha es la misma: la defensa de unos servicios públicos y de calidad para toda la población.

¡Correos se salva luchando!

Elecciones sindicales en Mc Donald's Montera (Madrid)

Victoria de la candidatura combativa de trabajadores

Comité de empresa de Mc Donald's Montera

El pasado 29 de septiembre, los trabajadores de Mc Donald's Montera (Madrid) decidimos por abrumadora mayoría la elección de un nuevo comité de empresa, un comité que por fin sirva a los intereses de los trabajadores y no sea correa de transmisión de las políticas de ésta. El apoyo era tan alto que la empresa no consiguió hacer una candidatura que pudiese enfrentarse a la nuestra.

Hasta ahora, los comités anteriores al nuestro se habían limitado a aceptar todas

y cada una de las imposiciones que la empresa hacía, sin ni siquiera consultar a la plantilla. Esta situación, junto a los retrocesos en nuestros derechos en los últimos años, es la que ha sentado las bases para que se haya fraguado una alternativa sindical combativa dentro de la empresa.

Programa combativo y extensión al resto de la empresa

El éxito de nuestra candidatura radica en dos principios. En primer lugar, consultar todas y cada una de las decisiones al conjunto de los trabajadores. Tenemos muy

claro que somos representantes de los trabajadores y debemos trasladar su voz y las decisiones adoptadas colectivamente. Ni el presidente del comité, ni ningún otro miembro del mismo, puede tomar decisiones unilaterales y al margen del control del resto del comité y de los trabajadores. Este será nuestro modo de funcionamiento. Y en segundo lugar, un programa combativo en el que nuestro primer objetivo es el de recuperar todas las conquistas que la empresa nos arrebató (con el visto bueno del anterior comité) en la pasada negociación del convenio. Sobre estos pilares fundamentales es sobre los que he-

mos construido un comité de trabajadores combativos.

El comité elegido es representante de un solo centro de trabajo y somos muy conscientes de las limitaciones que esto trae consigo. Por eso, otro de nuestros objetivos es la extensión al resto de centros de trabajo que pertenecen a la empresa matriz (Mc Donald's Sistemas España), así como la creación de un comité inter-centros: una herramienta que nos permita unificar al conjunto de los trabajadores de la empresa. De esta forma podremos presionar unidos para conseguir mejorar nuestras condiciones de trabajo. Creemos que con un comité que defienda unos métodos de lucha combativos, de clase y democráticos, podremos recuperar las condiciones de trabajo que nos fueron arrebatadas en los últimos años y además mejorarlas.

Ni despidos, ni cierre de centros ni recorte de derechos Por una lucha unificada de toda Navantia

Poco a poco, la carga de trabajo se agota en los astilleros Navantia. El lunes 2 de diciembre, justo al día siguiente de una multitudinaria manifestación en Ferrol en la que participaron decenas de miles de personas, partió, camino de Australia, el *Adelaide*, el último buque que quedaba en las factorías de la ría. Las gradas están ahora totalmente vacías y los contratos anunciados no

sólo no aparecen (como es el caso del flotel para la petrolera mexicana Pemex, cuyo corte de chapa iba a empezar en marzo de este año, según anunció en su momento el inefable ministro Montoro desde la tribuna del Congreso de los Diputados), sino que incluso desaparecen (como los cuatro gaseros para Repsol y Gas Natural, que se harán en Corea y Japón a pesar de las cuan-

tiosas ayudas públicas que ambas empresas reciben con el dinero de todos los españoles). En el resto de las factorías, la situación no es mejor: Puerto Real lleva ya mucho tiempo parada, en Cartagena la construcción de un submarino se ha visto gravemente afectada por la ineptitud de los responsables del proyecto y San Fernando enfila la recta final de sus últimos encargos.

Javi Losada, Xaquín G^a Sinde, Carmen Sixto y Vicente Ferrer
Miembros de la Comisión Ejecutiva de CCOO Navantia-Ferrol, por el Sector Crítico

Toda esta situación, sumado al anuncio por parte de la empresa de que el Consejo de Administración aprobaría el 4 de diciembre el Plan Estratégico de Navantia 2014-2018 (en el que uno de los escenarios que se contemplaba era un recorte de costes de más del 50%, lo que sólo podría implicar reducción de plantillas y cierre de centros), está dando lugar a un alto nivel de movilización, especialmente en la comarca ferrolana, donde hasta el PP se nos ha vuelto pancartero. El 28 de noviembre, sus alcaldes y concejales protagonizaron... ¡una concentración ante la sede de Navantia y la SEPI en Madrid al grito de "Si esto no se arregla, leña, leña, leña"! que de seguro dejó alucinados a los policías nacionales allí destacados. En cualquier caso, esta maniobra de distracción del PP ferrolano no le sirvió de mucho, y de hecho el alcalde de Ferrol no se atrevió a acudir abiertamente a la manifestación del día 1 (se incorporó casi clandestinamente a la cola de la manifestación en medio del itinerario y recorrió un trecho de poco más de cien metros, antes de hacer mutis por el foro sin que casi nadie se enterase de su presencia).

El Plan Estratégico, congelado de momento

Llegado el día 4, la empresa no aprobó ningún plan, ahora convertido en un "documento de trabajo sobre el futuro de Navantia", según le comunicó al comité intercentros el día 2. La razón de esto es que al PP las cosas no le están saliendo como pensaba. Su estrategia tenía dos fases: la negociación del convenio colectivo (iniciada en abril) y el plan. Su objetivo político en la primera fase era conseguir que los trabajadores de Navantia nos resignásemos a perder derechos, lo cual facilitaría la segunda fase (el plan), donde el empeoramiento de nuestras condiciones laborales se agravaría exponencialmente.

Sin embargo, en la factoría de Ferrol se levantó una gran oposición —impulsada por el Sector crítico de CCOO— a la pérdida de derechos aceptada por los dirigentes sindicales, y además ese ambiente tuvo un efecto en otras factorías. Por eso, a pesar de que el 16 de octubre la comisión negociadora del convenio firmó, por 7 votos contra 5, un preacuerdo que incluía toda una serie de recortes, ese preacuerdo se ha quedado en el limbo.

La no presentación del plan el día 4 es una buena noticia que revela debilidad en el PP, pero que no debe hacernos bajar la guardia porque es evidente que, a un ritmo u otro, el PP intentará aplicar en Navantia la misma política de recortes que está aplicando en todas partes, incluidas otras empresas de la SEPI. El último ejemplo es Tragsa, que el 29 de noviembre despidió a 1.336 trabajadores con 20 días por año y un tope de 12 mensualidades, en aplicación del despido objetivo por previsión de pérdidas introducido con la reforma laboral del año pasado (al que, por cierto, también se acogió



la dirección fidalguista de CCOO de Galicia para despedir hace unas semanas a nueve trabajadores del sindicato). En el caso de Navantia es posible que el PP opte ahora por una estrategia de ligar la consecución de nuevos contratos a que los trabajadores aceptemos una reducción salarial brutal y peores condiciones laborales, amparándose en que ésta sería la única manera de mantener abiertos todos los centros y no recurrir a los despidos, y apelando a la responsabilidad de los dirigentes sindicales para "gestionar" la situación. Esto no sería más que un nuevo chantaje al que tenemos que hacer frente con rotundidad. Por tanto, no sólo debemos seguir movilizándonos, sino que además debemos aumentar la presión sobre el gobierno. En este sentido, hay que ser conscientes de una trampa que el PP nos quiere tender.

Maniobras divisionistas del PP

El PP de cada zona geográfica quiere aparecer como el defensor de sus respectivas factorías y culpar de los males de la empresa a los directivos. Hace esto no preocupado por los trabajadores, sino por las próximas elecciones municipales. Con su demagogia, intentan aparecer como los amigos de los trabajadores, desviar la responsabilidad del Gobierno de su partido y, sobre todo, crear divisiones entre los trabajadores que impidan que nos unamos para luchar todos juntos contra el PP. ¿Nos conviene enfrentarnos entre nosotros? Rotundamente NO.



Nuestro objetivo tiene que ser que los trabajadores no suframos recortes ni pérdida de derechos, pero ni en nuestra factoría, ni en el resto ni en ninguna otra empresa. Todos los trabajadores tenemos el mismo interés: que Navantia siga siendo 100% pública, que todas las factorías sigan abiertas, que se mantengan todos los empleos y unas condiciones laborales dignas, y también que las condiciones laborales de las compañías se equiparen a las de la principal porque la otra alternativa es que las condiciones laborales de la plantilla principal se equiparen a la de las compañías. Actuar de otra manera nos convertiría en los tontos útiles del PP.

Un enfoque sindical localista, dirigido a que los ajustes le caigan al vecino, sería un grave error. Cuando Núñez Feijóo pidió los balances de Navantia desglosados por factorías para salvar de la quema a la más eficiente (que en estos últimos años fue la de Ferrol, como él sabe de sobra), lo hizo para intentar que los trabajadores ferrolanos veamos al PP gallego como un aliado en defensa de "lo nuestro" y, llevados por el egoísmo, abandonemos a su suerte a nuestros compañeros del resto de las factorías, evitando así una lucha unificada de toda Navantia a nivel estatal.

Lamentablemente, la cortedad de miras localista no es patrimonio de la derecha. Al día siguiente de las declaraciones de Feijoo, el BNG se apresuró a enviarle los balances desglosados a través del registro oficial del parlamento gallego. También, tras aprobar

un Consejo de Ministros en noviembre más de 700 millones de euros para el programa de los submarinos, un diputado autonómico andaluz de IU declaró que "mientras no se encuentran diez millones de euros para los Buques de Acción Marítima [de Cádiz], se destinan más de 700 millones para construir submarinos en Cartagena, lo cual no está justificado desde el punto de vista estratégico ni social". El portavoz del grupo municipal de IU en el ayuntamiento de Cartagena demostró tener más madurez política cuando le replicó que veía posible destinar 10 de esos más de 700 millones a otras factorías y que del programa de submarinos dependía mucho empleo en Cartagena.

Por una Marcha a Madrid de todas las factorías

El camino de una guerra territorial entre trabajadores conduce al precipicio, por varias razones:

- 1) Implica aceptar que el gobierno ignore la rentabilidad social de las factorías de Navantia y que el único criterio sea la rentabilidad económica, es decir, implica asumir la ideología neoliberal.
- 2) Implica asumir que los trabajadores son los responsables de los déficits de su factoría y que, por tanto, tienen que pagar las consecuencias. ¿La situación de la factoría de Puerto Real es responsabilidad de los compañeros de allí? ¿La degradación general que sufre Navantia es responsabilidad de sus trabajadores? ¿La crisis económica es culpa de la clase obrera, que vivía por encima de sus posibilidades?

3) Significa tirar piedras contra nuestro propio tejado porque todos podemos ver cómo el PP provoca deliberadamente situaciones deficitarias para después justificar sus hachazos. ¿O no vemos esto constantemente en la sanidad pública, por ejemplo?

4) Es una declaración de impotencia porque evidencia resignación ante las políticas del PP, evidencia que no se cree en la posibilidad de derrotar al gobierno y que, por tanto, sólo se aspira al mal menor.

No podemos caer en la trampa del PP. Ni tampoco aceptar su discurso de que no hay dinero. Lo hay, y mucho, pero tiene que dejar de ser regalado a espaldas a la banca y las empresas privadas, y destinarse a las empresas y servicios públicos. En este sentido, la estrategia necesaria para que la lucha de Navantia acabe en victoria es unificar las luchas y contribuir a levantar una rebelión social de toda la clase obrera contra los recortes del PP. Lo que hace falta no son alianzas con los PP locales, sino luchar todos juntos para acabar con los recortes y con el propio gobierno.

No necesitamos localismos, sino un plan de movilizaciones estatal contundente que incluya una huelga general conjunta de todas las factorías (ampliada a la localidad allí donde Navantia tiene más peso) y una marcha a Madrid que también sirva para celebrar una asamblea general conjunta de todos los trabajadores de Navantia. La lucha de Navantia tiene que convertirse en un nuevo referente de la lucha contra los recortes del PP. Este es el único camino para vencer.



Entrevista a Ana García

secretaria general del Sindicato de Estudiantes



Únete a la corriente marxista agrupada en el periódico obrero EL MILITANTE y lucha con nosotros por una alternativa socialista:



“Esta lucha implica a toda la juventud, a la comunidad educativa y a la clase obrera. Si queremos que Wert dimita y que se retire la LOMCE hay que continuar la batalla con una nueva huelga educativa de 72 horas”

EL MILITANTE.— El Sindicato de Estudiantes ha organizado este curso cuatro huelgas estudiantiles contra la LOMCE, incluida la huelga educativa del 24 de octubre, y ha impulsado activamente la marcha sobre Madrid del 30 de noviembre. ¿Qué balance hacéis de la lucha en defensa de la enseñanza pública?

Ana García.— Desde el Sindicato de Estudiantes hemos destacado que la enorme movilización estudiantil de los pasados 22, 23 y 24 de octubre, con la que por enésima vez en menos de un año y medio hemos vaciado las aulas —demostrando la oposición de la juventud a quienes quieren devolvernos al sistema educativo del franquismo— y especialmente las impresionantes manifestaciones del día 24 de ese mes, han colocado al ministro Wert y a sus contrarreformas en su momento de mayor debilidad.

La comunidad educativa dejó claro que la derecha está en minoría absoluta. El 24 de octubre más de dos millones de personas inundamos las calles de todo el estado para pedir la dimisión del ministro y la retirada de todas las contrarreformas educativas y los recortes. En ese momento, con una huelga masiva del profesorado y los estudiantes, con un clamor generalizado contra la LOMCE, nos dirigimos a las direcciones de los sindicatos del profesorado y organizaciones de madres y padres para plantear que era el momento de dar el último empujón, el definitivo, a este ministro. No nos cabe ninguna duda de que si la propuesta que realizó el Sindicato de Estudiantes de organizar una nueva huelga de 72 horas de toda la comunidad educativa durante el mes de noviembre se hubiera llevado a cabo, habríamos obtenido una victoria incontestable.

EM.— Tras la exitosa movilización del 24-O volvisteis a salir a la huelga el 20 de noviembre, pero en esta ocasión padres y profesores no os acompañaron. ¿Por qué decidisteis mantener la llamada a la huelga?

AG.— Efectivamente, desde el SE planteamos la necesidad inmediata de dar continuidad a la movilización del 22, 23 y 24 de octubre, y así lo planteamos a la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, donde estamos junto a CCOO, UGT, STEs, CGT, CEAPA y otras organizaciones estudiantiles. Lamentablemente, nuestra propuesta de organizar la huelga de tres días de manera unitaria, padres, profesores y estudiantes no contó con el apoyo de las direcciones de CCOO, UGT, STEs, ni de CEAPA, aunque el apoyo entre sus bases era claro. Entendíamos que tras el éxito del 24-O había que dar una continuidad a la lucha y en ese sentido la huelga estudiantil del día 20 —coincidiendo con la aprobación de la LOMCE en el Senado— cumplió un papel clave como puente y como palanca para continuar la movilización con la Marcha Estatal del 30 de noviembre. Se trataba de evitar que se diera carpetazo a la movilización, situando públicamente en la comunidad educativa el debate de la continuidad de la lucha.

El día 20 volvimos a vaciar las aulas de miles de institutos públicos, y la movilización contó con un apoyo también muy importante en la universidad. También logramos confluir con trabajadores en lucha, como se pudo ver en la manifestación de Ferrol en la que los trabajadores de Navantia nos acompañaron. Esta jornada, y esta demostración de que sí se podía continuar fueron claves para que las direcciones sindicales de profesores y padres convocaran la marcha estatal a Madrid del pasado 30-N. Como señalamos en las manifestaciones y concentraciones del 20 de noviembre, la huelga de los barrenderos de Madrid era para nosotros un ejemplo muy concreto, que demostraba en la práctica que sí se puede vencer al Partido Popular. Ellos echaron atrás nada más y nada menos que 1.100 despidos pero fue gracias a una condición: una lucha, seria, unitaria y contundente. Precisamente lo que nosotros demandamos para hacer más

fuerte a la Marea Verde y vencer a Wert y sus políticas.

EM.— En la marcha estatal el pasado 30 de noviembre se os impidió hablar desde el estrado. De hecho, fuiste arrastrada y te arrebataron el micrófono. ¿A qué responde esta agresividad? ¿Tanto miedo os tienen como para impedir la libertad de expresión de una organización que ha impulsado de manera tan decidida la Marea Verde?

AG.— No se trata sólo de miedo. Se trata de que el Sindicato de Estudiantes está planteando de manera consecuente una política de frente único a las organizaciones del profesorado y de padres para continuar la lucha. Y nuestro llamamiento conecta con el sentimiento dominante que existe en la comunidad educativa, pero choca con la estrategia de la dirección del PSOE y las cúpulas confederales de UGT y CCOO, que insisten en una política de paz social, de negociación de los retrocesos y, en última instancia, de debilidad frente a la agresividad de la derecha.

La movilización del 30-N fue retrasada dos semanas a pesar de la insistencia del SE de que se mantuviera el 9 de noviembre, como previamente se había acordado por parte de todas las organizaciones de la Plataforma. Nuestra insistencia en que se mantuviera para la fecha acordada era para dar inmediata continuidad a la histórica huelga del 24 de octubre, dejando así un calendario más abierto para, durante el mes de noviembre, poder convocar una nueva huelga general de toda la comunidad educativa de 72 horas. La discusión en las reuniones de la Plataforma ha sido muy dura, y en la práctica, las presiones de la dirección del PSOE se han dejado sentir con mucha intensidad. Finalmente la Marcha estatal se celebró, pero sólo el Sindicato de Estudiantes y sectores de la Federación de Enseñanza de CCOO apostamos a fondo por su éxito, y logramos con un duro trabajo reunir a decenas de miles en el centro de Madrid.

PASA A LA PÁGINA 8

- Reducción de la jornada laboral a 35 horas sin reducción salarial. Contra el desempleo: reparto del trabajo.
- Jubilación a los 60 años con el 100% del salario con contratos de relevo, manteniendo la estabilidad en el empleo.
- No a la precariedad laboral. Fijo a los quince días. Por trabajo periódico, contratos de fijos discontinuos.
- Salario Mínimo de 1.100 euros al mes a partir de los 16 años.
- No a la reforma laboral.
- Defensa de la empresa pública. No a las privatizaciones. Planes de inversión y renovación tecnológica que garanticen todos los puestos de trabajo.
- No a la discriminación de la mujer trabajadora. A igual trabajo, igual salario.
- Defensa de la sanidad pública. No a la privatización.
- Por una red educativa pública, única, laica, gratuita, científica y de calidad. 7% del PIB para la educación pública.
- No a los recortes en el subsidio de desempleo.
- Un puesto de trabajo o subsidio de desempleo indefinido igual al SMI hasta encontrar trabajo.
- Vivienda digna. Nacionalización de las grandes empresas constructoras y municipalización del suelo urbano para acometer la construcción de un millón de viviendas sociales en los próximos cuatro años.
- Ninguna restricción en nuestros derechos de expresión, reunión y huelga. No a la Ley de Partidos.
- Por el derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas. Por una Federación Socialista de Nacionalidades Ibéricas.
- Depuración de los elementos reaccionarios del aparato del Estado. Control por parte de los sindicatos obreros de las academias militares y de policía.
- Ninguna discriminación en el empleo por edad, sexo o nacionalidad. Derogación de la Ley de Extranjería. Plenos derechos laborales y ciudadanos para los inmigrantes.
- Expropiación de las empresas que se declaren en quiebra o en suspensión de pagos, bajo control obrero.
- Nacionalización de la banca, la tierra y los monopolios sin indemnización, salvo en casos de necesidad comprobada, y bajo control obrero. De esta forma se podría planificar democráticamente la economía en beneficio de la mayoría de la sociedad.

¡Suscríbete! Apoya la prensa obrera



Suscripción anual ▶ 11 números

	Normal	Ayuda
Estado español	23 €	35 €
Resto del mundo	35 €	47 €

Envía tus datos y un Giro Postal al Apartado de Correos 5.200, 28080 Madrid o comunícale con nosotros a través del formulario de suscripción que aparece en nuestra web

Suscríbete

- ▶ Recibe El Militante en tu casa
- ▶ Apoya la prensa obrera

Edita: AC El Militante • DL: M-14564-1989

CONTACTA CON NOSOTROS

ANDALUCÍA			
• Cádiz	678 940 435	• Girona	657 212 367
• Granada	616 893 592	• Tarragona	660 721 075
• Málaga	952 276 563	EUSKAL HERRIA	
• Sevilla	619 745 685	• Álava	945 231 202
ARAGÓN		• Guipúzcoa	625 707 798
• Zaragoza	697 338 376	• Pamplona	635 919 738
ASTURIAS	985 550 933	• Vizcaya	656 714 818
CASTILLA-LA MANCHA		GALICIA	
• Guadalajara	949 201 025	• Compostela	679 500 266
• Puertollano	650 837 265	• Coruña	600 810 516
• Toledo	699 956 847	• Ferrol	626 746 950
CASTILLA Y LEÓN		• Vigo	636 217 248
• Salamanca	653 699 755	MADRID	914 280 397
CATALUNYA		PAÍS VALENCIA	685 098 482
• Barcelona	933 248 325		

www.elmilitante.net • elmilitante@elmilitante.net